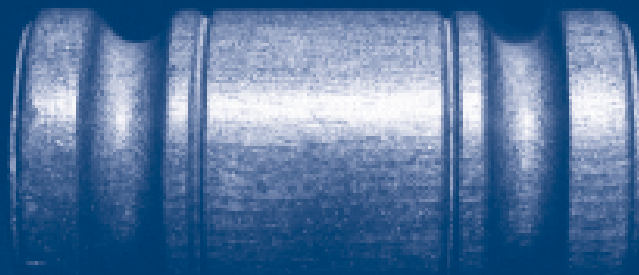


El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)

Evaluando la capacidad de América Latina para detectar,
castigar y prevenir la corrupción

2023



Brian Winter
Vicepresidente de Policy
en AS/COA

Geert Aalbers
Socio
en Control Risks

QUIÉNES SOMOS



Americas Society/Council of the Americas es el principal foro dedicado a la educación, al debate y al diálogo en las Américas. Su misión es fomentar el entendimiento de los asuntos contemporáneos políticos, sociales y económicos que enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá. Las conclusiones de este reporte no necesariamente reflejan los puntos de vista de AS/COA y sus miembros.



Control Risks es una empresa global de consultoría especializada en riesgos que ayuda a construir organizaciones seguras, en regla y resilientes en una época de riesgos cambiantes y conectividad. Nuestros expertos, repartidos en 36 oficinas, ayudan a nuestros clientes a investigar irregularidades y resolver crisis, y proporcionan la visión estratégica y la inteligencia necesaria para que las empresas puedan aprovechar oportunidades y crecer.

DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

ESTE ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN (CCC) SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE COMO DOCUMENTO DE REFERENCIA Y CON FINES INFORMATIVOS ÚNICAMENTE. EL USO DE CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ÍNDICE CCC SERÁ A RIESGO PROPIO DE CADA PARTE Y SIN RESPONSABILIDAD YA SEA ANTE LA AMERICAS SOCIETY/COUNCIL OF THE AMERICAS O CONTROL RISKS. NINGUNA PARTE DEBERÁ EDITAR, ALTERAR O UTILIZAR NINGUNA PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ÍNDICE CCC DE UNA MANERA QUE DISTORSIONE, ALTERE, UTILICE INCORRECTAMENTE O MAL REPRESENTE EL ÍNDICE CCC SEGÚN LO PUBLICADO POR LA AMERICAS SOCIETY/COUNCIL OF THE AMERICAS Y CONTROL RISKS.

Tabla de Contenidos

02 Introducción

04 Visualización de Datos

04 Puntajes Generales

05 Puntajes Generales 2019-2023

06 Variación de Puntaje General 2022-2023

07 Resultados por Categoría

08 Reportes País

08 Uruguay

10 Costa Rica

12 Chile

14 Perú

16 República Dominicana

18 Panamá

20 Argentina

22 Brasil

24 Colombia

26 Ecuador

28 Paraguay

30 México

32 Guatemala

34 Bolivia

36 Venezuela

38 Metodología

42 Apéndice de Datos

junio de 2023



El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023

Evaluando la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción

El Índice CCC 2023 refleja un entorno anticorrupción que ha sido sometido a continuas presiones a lo largo y ancho de América Latina. Con las democracias y las instituciones fundamentales bajo presión en la región, el Índice registró un descenso en la puntuación promedio de la región por primera vez desde 2020. Las puntuaciones cayeron, en diversos grados, en diez de los quince países estudiados.

La corrupción sigue siendo un reto de primer orden en toda América Latina, dado que casi el 70% de los participantes—importantes especialistas en anticorrupción—en la encuesta realizada por el Índice CCC coincidieron en que es una "de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país". Sin embargo, en muchos países, otros retos como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad civil. El resultado final es un entorno anticorrupción que en muchos países está menos activo y movilizado que en años anteriores. En general, los retrocesos no han sido dramáticos en comparación con 2022, sino que reflejan una erosión continua que lleva años desarrollándose.

Se produjeron descensos tanto en los países situados en la parte alta del Índice, como Uruguay y Costa Rica, como en la parte baja del Índice, como Guatemala y Venezuela, lo que indica que ningún país es inmune al estancamiento o al retroceso en la lucha contra la corrupción.

UN INSTRUMENTO BASADO EN DATOS

Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks publican la quinta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). Publicado por primera vez en 2019, el Índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala.

El Índice CCC examina 14 variables clave, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. El Índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado. Por cuarto año consecutivo, el Índice abarca 15 países, que en conjunto representan 96% del PIB de América Latina.

El país con la puntuación más alta en el Índice CCC 2023 es Uruguay (6.99 sobre 10). Uruguay es seguido por Costa Rica (6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83), Colombia (4.78), Ecuador (4.68), Paraguay (4.61), México (3.87), Guatemala (2.86), Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46).

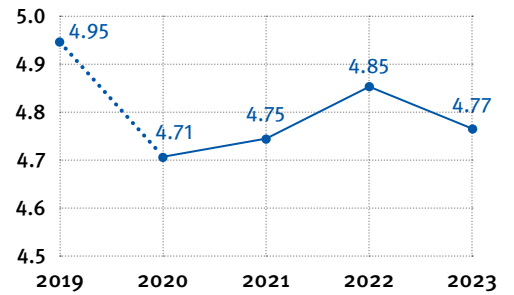
ENTRE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS:

- Dos de los 15 países experimentaron descensos significativos en sus puntuaciones en 2023, y un país experimentó una mejora sustancial. Los otros países experimentaron cambios relativamente pequeños en las puntuaciones (hasta un 6%), aunque, con pocas excepciones, todas estas variaciones fueron negativas.
- Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del Índice, aunque experimentó un año consecutivo de retroceso. A pesar de retrocesos moderados, Costa Rica y Chile también conservaron la segunda y tercera posición.
- Panamá registró el mayor aumento proporcional en su puntuación general, impulsado principalmente por las mejoras en su capacidad legal. Panamá, la República Dominicana y Paraguay mejoraron su puntuación general por tercer año consecutivo.
- Guatemala y Venezuela tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales. Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez en 2019.

El objetivo del Índice CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar—mediante datos y una metodología sólida—las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse.

Puntaje General

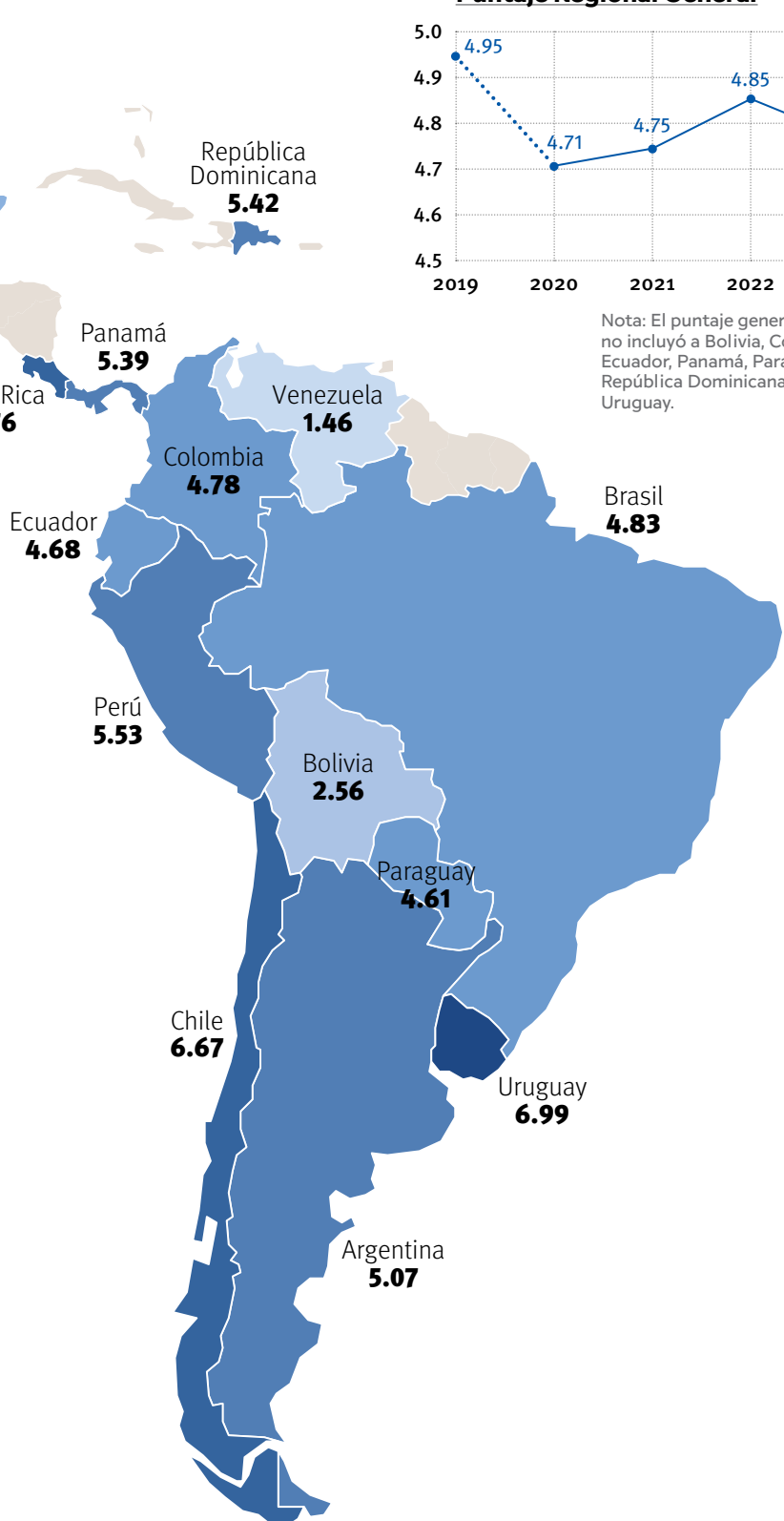
Puntaje Regional General



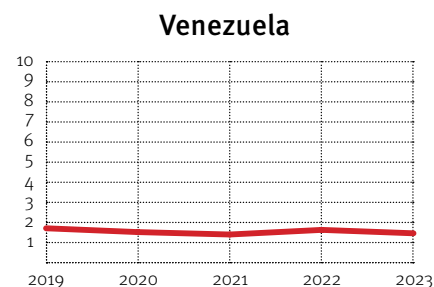
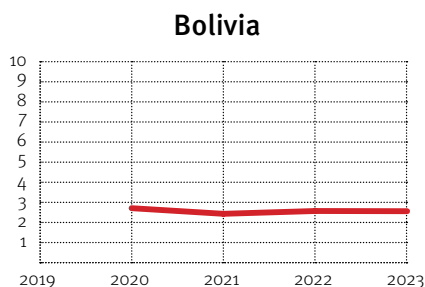
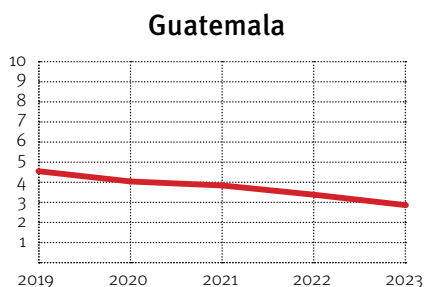
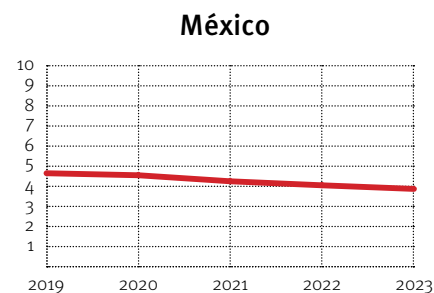
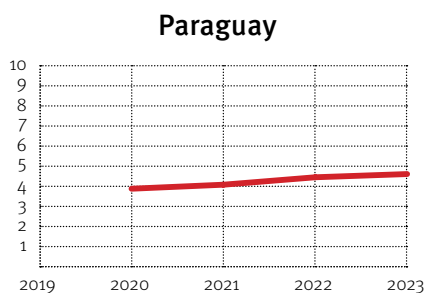
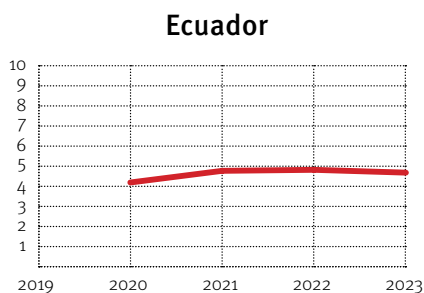
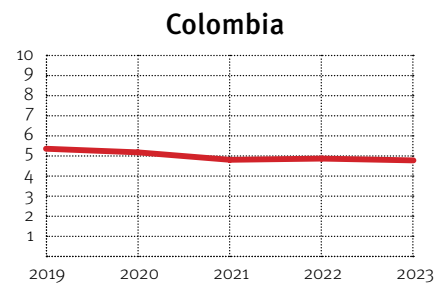
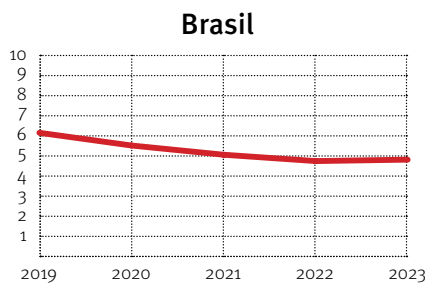
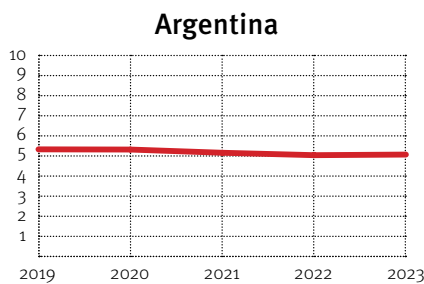
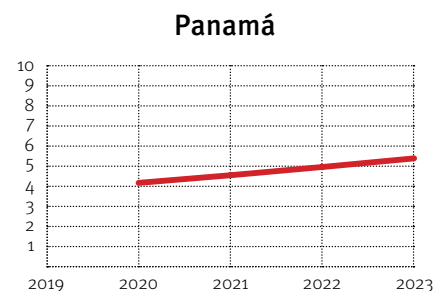
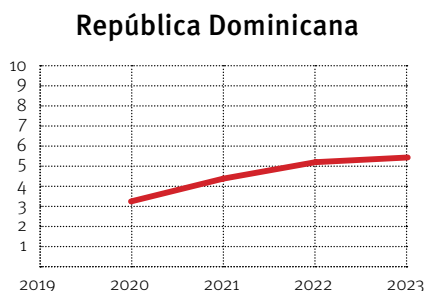
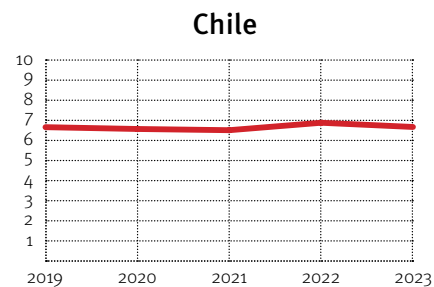
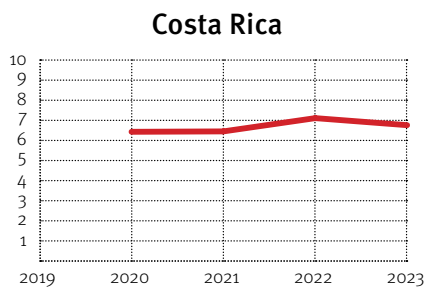
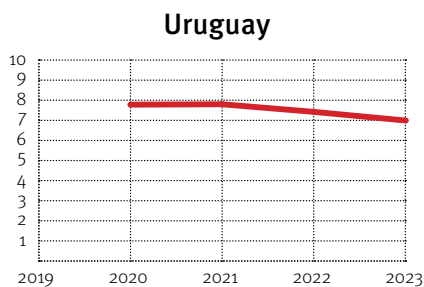
Nota: El puntaje general de 2019 no incluyó a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

Ranking General

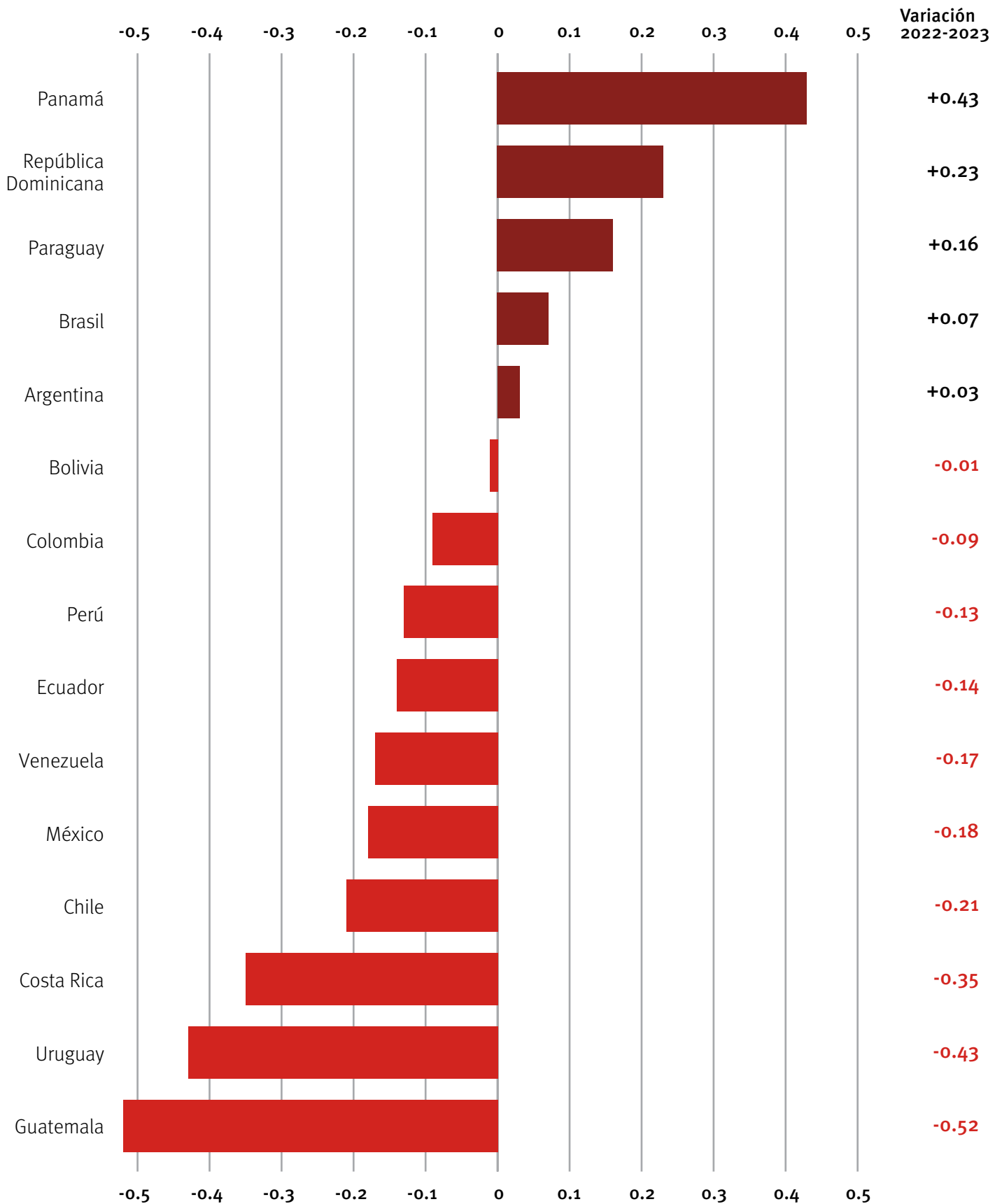
1	Uruguay	6.99
2	Costa Rica	6.76
3	Chile	6.67
4	Perú	5.53
5	República Dominicana	5.42
6	Panamá	5.39
7	Argentina	5.07
8	Brasil	4.83
9	Colombia	4.78
10	Ecuador	4.68
11	Paraguay	4.61
12	México	3.87
13	Guatemala	2.86
14	Bolivia	2.56
15	Venezuela	1.46



Puntajes Generales (2019–2023)

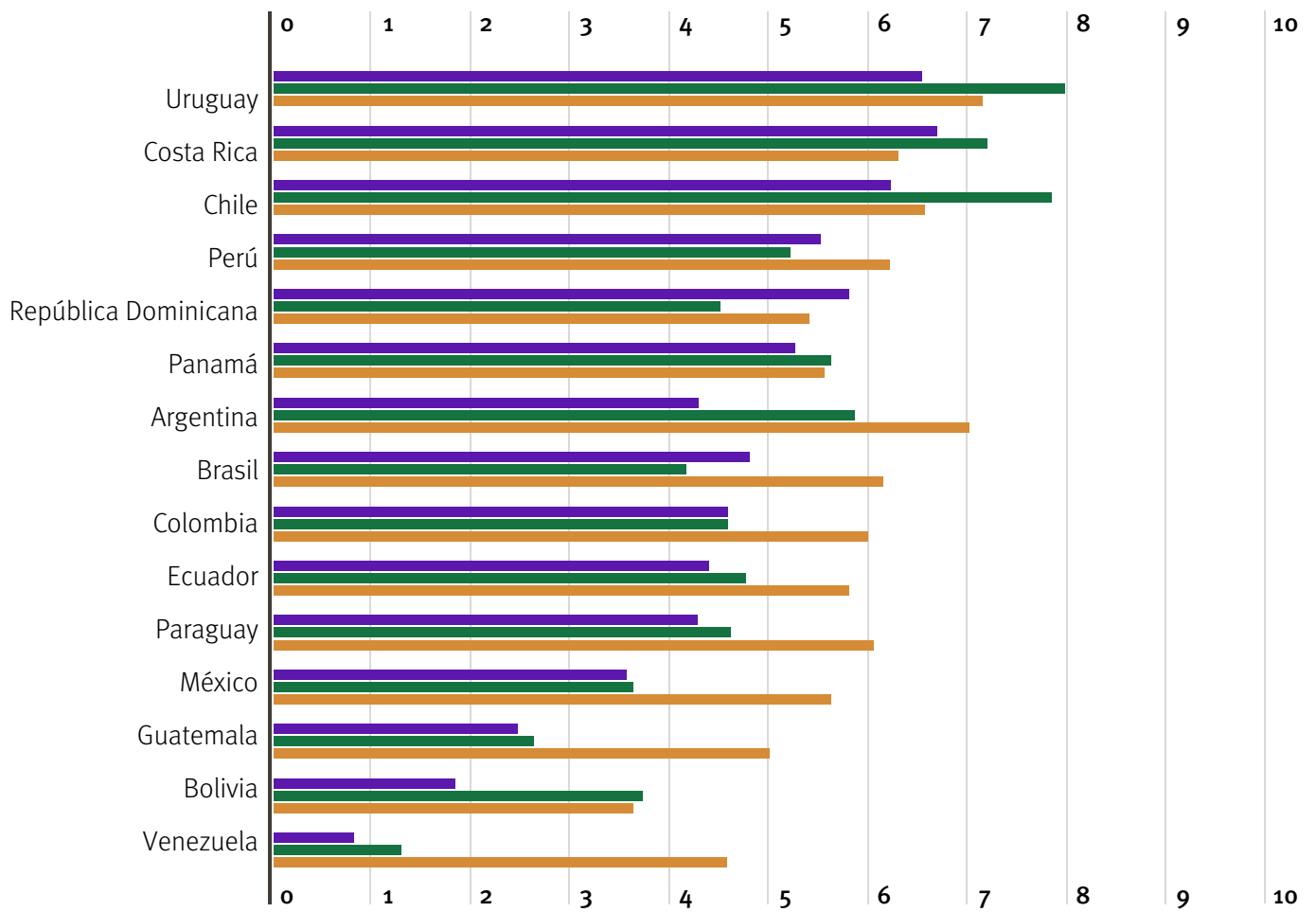


Variación de Puntaje General 2022-2023



Resultados por Categoría

■ Capacidad Legal
 ■ Democracia e Instituciones Políticas
 ■ Sociedad Civil y Medios de Comunicación



Capacidad Legal

Democracia e Instituciones Políticas

Sociedad Civil y Medios de Comunicación





URUGUAY

1
RANKING

6.99

Puntaje General 2023

7.42

Puntaje General 2022

7.80

Puntaje General 2021

7.78

Puntaje General 2020

6.54 Capacidad Legal

7.98 Democracia e Instituciones Políticas

7.15 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría

Capacidad Legal

Independencia y eficiencia judicial

Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción

Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno

Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación

Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco

Calidad de los instrumentos de delación premiada

Nivel de cooperación internacional en materia de orden público

Democracia e Instituciones Políticas

Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas

Procesos legislativos y de gobierno

Calidad general de la democracia

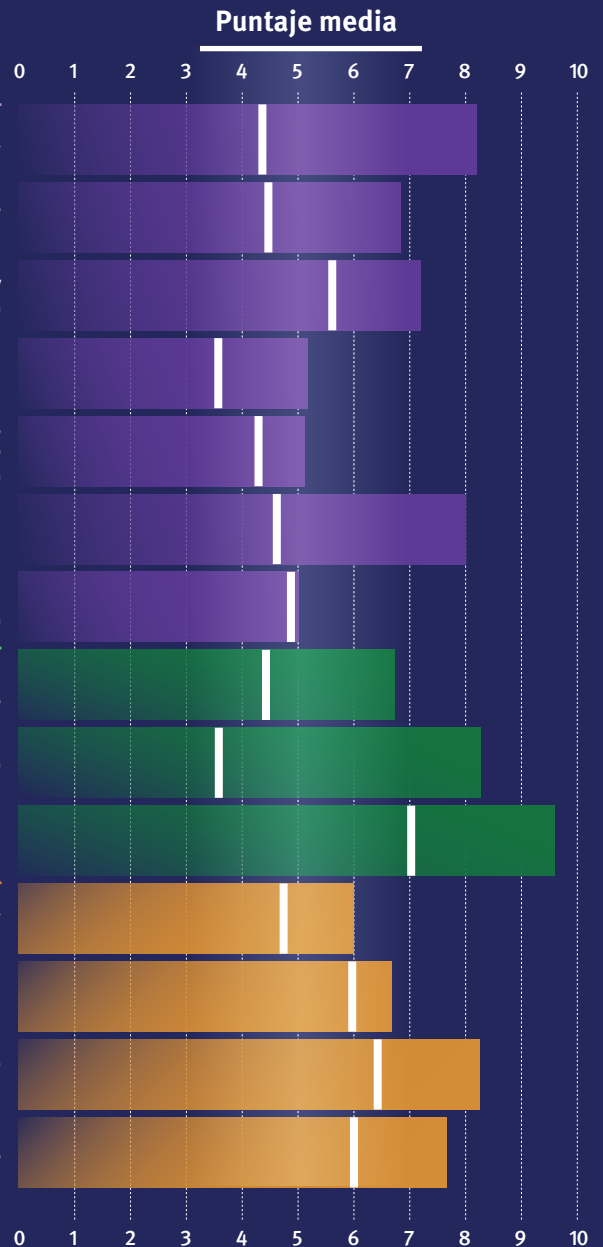
Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Movilización de la sociedad civil contra la corrupción

Mejoras en la educación

Calidad de la prensa y del periodismo de investigación

Comunicaciones digitales y redes sociales





1

RANKING

URUGUAY

Uruguay sigue ocupando el primer puesto del Índice, a pesar de que tuvo una caída del 6% en su puntuación global y de haber disminuido sus puntuaciones en las tres categorías. Aunque el país ha experimentado una ligera tendencia a la baja desde 2021, sigue superando el promedio regional en todas las variables.

Uruguay registró retrocesos en variables fundamentales de la capacidad legal, como la independencia y la eficacia judicial, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y la cooperación internacional en materia de orden público. Algunos observadores consideran que la principal agencia anticorrupción del país, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), sigue careciendo de fondos suficientes, lo que puede socavar los esfuerzos anticorrupción en el futuro. Una expresidente de la JUTEP que renunció en noviembre de 2022 declaró previamente que la organización carecía de recursos y que se había politizado.

Un escándalo de corrupción protagonizado por Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, llevó a algunos observadores a cuestionar la reputación de buena gobernanza de Uruguay. Astesiano fue acusado de falsificar actas de nacimiento para expedir pasaportes uruguayos falsos a ciudadanos rusos y en febrero fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias y asociación para delinquir, entre otros delitos. Lacalle Pou negó tener conocimiento de los delitos cometidos por Astesiano. La prensa uruguaya desempeñó un papel clave en el esclarecimiento del caso, lo que indica el poder de los periodistas del país para destapar la corrupción.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Si se aprueba, un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso podría nombrar un órgano directivo de tres miembros al frente de la Fiscalía General. Este órgano incluiría al actual fiscal de Corte y a dos fiscales que serían nombrados por el poder ejecutivo, con la aprobación de tres quintas partes del Senado. El debate sobre el proyecto de ley seguirá siendo polémico: la coalición gobernante respaldó la propuesta y la oposición se opone a ella por considerar que existe el riesgo de injerencias políticas.

Uruguay tendrá elecciones generales en octubre de 2024 y, debido a que habrá mayor atención mediática por el caso Astesiano, la corrupción puede ser un tema en las campañas.



COSTA RICA

2
RANKING

6.76

Puntaje General 2023

7.11

Puntaje General 2022

6.45

Puntaje General 2021

6.43

Puntaje General 2020

6.69 Capacidad Legal

7.19 Democracia e Instituciones Políticas

6.30 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría

Capacidad Legal

Independencia y eficiencia judicial

Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción

Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno

Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación

Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco

Calidad de los instrumentos de delación premiada

Nivel de cooperación internacional en materia de orden público

Democracia e Instituciones Políticas

Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas

Procesos legislativos y de gobierno

Calidad general de la democracia

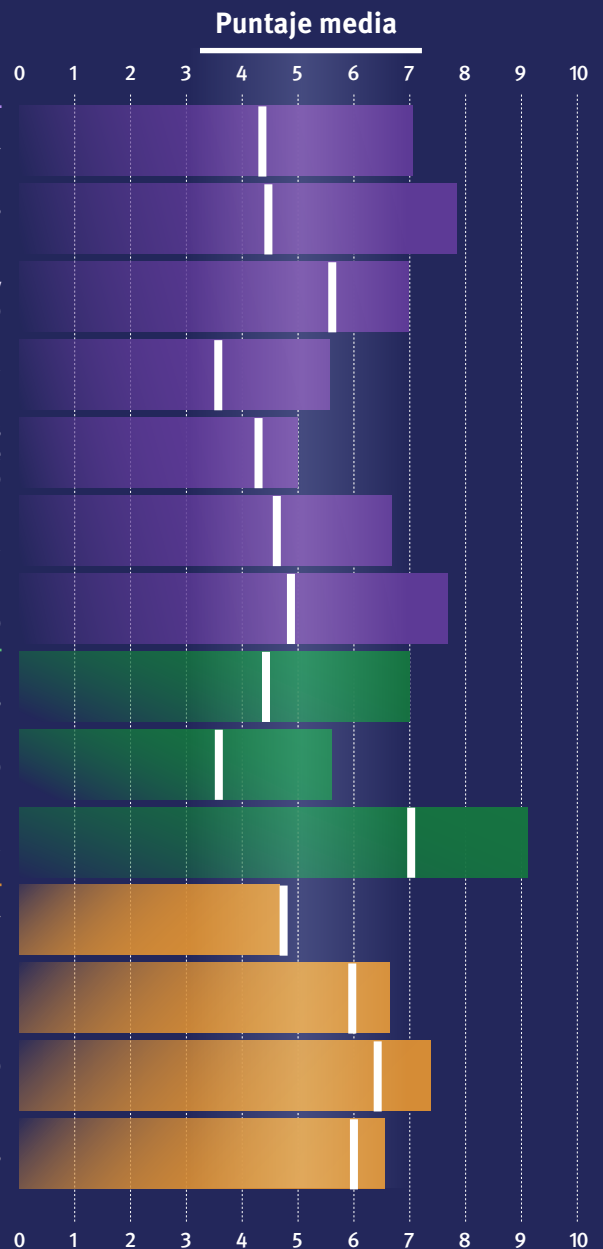
Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Movilización de la sociedad civil contra la corrupción

Mejoras en la educación

Calidad de la prensa y del periodismo de investigación

Comunicaciones digitales y redes sociales





COSTA RICA

A pesar de sufrir un retroceso del 5% en su puntuación global, Costa Rica mantuvo su segundo puesto en el ranking, y su puntuación para 2023 se mantuvo por encima de los niveles del 2021 y 2020. Costa Rica registró descensos moderados en las categorías de democracia e instituciones políticas y capacidad legal, y un ligero repunte en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación.

Costa Rica experimentó retrocesos en indicadores fundamentales relacionados con la fiscalía general, la financiación de las campañas electorales y la calidad de la prensa, pero mantuvo su posición entre los tres primeros puestos en esas variables. El Presidente Rodrigo Chaves, en cargo desde mayo de 2022, se postuló con un programa antisistema y anticorrupción. Su administración ha presentado una propuesta de ley para proporcionar protección y, en algunos casos, recompensa económica a quienes denuncien y sirvan como testigos en procesos penales relacionados con actos de corrupción.

Tras el ciclo electoral de 2022, el país sufrió un revés del 9% en la variable que evalúa la calidad de la legislación sobre financiación de campañas electorales. En junio de 2022, el tribunal electoral anunció que una investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Chaves reveló "un oscuro esquema de financiamiento", y están en curso investigaciones sobre la financiación de varios partidos políticos durante la campaña de 2022. En septiembre, una comisión especial del Congreso empezó a investigar la presunta financiación irregular. Chaves ha negado haber cometido irregularidades. Costa Rica sufrió un revés del 12% en la variable que evalúa la calidad de la prensa y el periodismo de investigación, y observadores han expresado su preocupación por las críticas de Chaves a los medios de comunicación independientes.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Las investigaciones en el caso Cochinilla (uno de los ejemplos más significativos de corrupción en el sector de la construcción en Costa Rica) continuarán. Los avances pueden ser lentos debido a ineficiencias en el sistema judicial.

En febrero de 2023, Costa Rica fue incluida por primera vez en una lista de 16 jurisdicciones que la Unión Europea designó como no cooperantes en materia fiscal. El gobierno se ha comprometido a adaptar la legislación y a minimizar el impacto de dicha decisión en las inversiones. Se espera que la UE actualice esta lista en octubre de 2023.



CHILE

3
RANKING

6.67

Puntaje General 2023

6.88

Puntaje General 2022

6.51

Puntaje General 2021

6.57

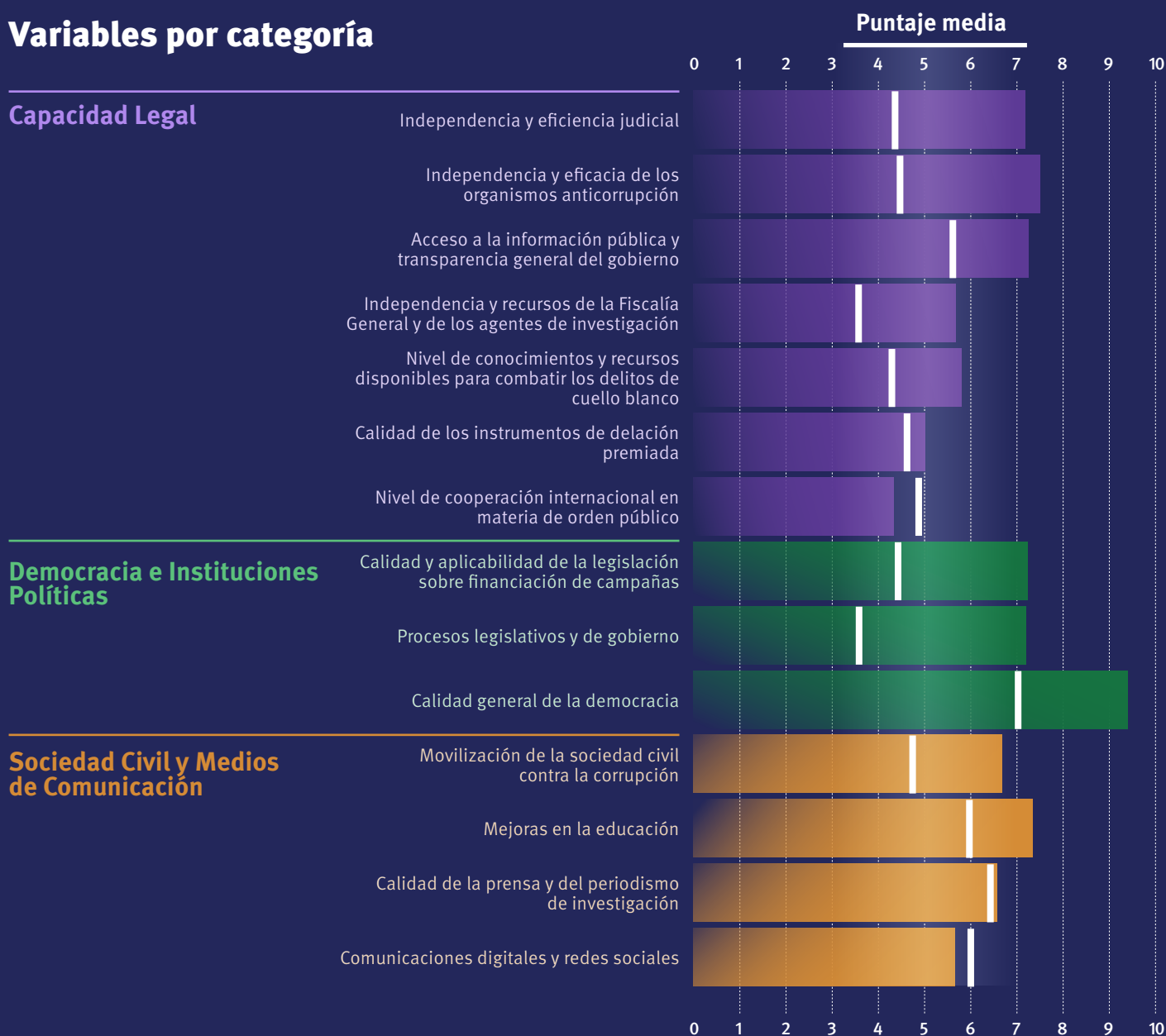
Puntaje General 2020

6.22 Capacidad Legal

7.84 Democracia e Instituciones Políticas

6.56 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





CHILE

La puntuación global de Chile descendió un 3%, lo que indica un cierto grado de estancamiento en su lucha contra la corrupción. El país conservó el tercer puesto y se mantiene muy por encima de la media regional en las tres categorías. Las principales investigaciones por corrupción siguen avanzando en Chile, como aquellas que apuntan a altos mandos militares. El ritmo sostenido de las investigaciones y los procesamientos indica que la capacidad del país para detectar y castigar la corrupción sigue siendo sólida.

El aumento de los niveles de politización ha afectado a algunas instituciones durante el último año. Tras el fin del mandato del anterior fiscal nacional en septiembre de 2022, el gobierno de Gabriel Boric propuso sin éxito a dos candidatos para sustituirle. El Senado aprobó al tercer candidato en enero de 2023, también propuesto por Boric. Algunos críticos calificaron el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal nacional como politizado y poco transparente.

El mayor retroceso de Chile en 2023 en cuanto a categorías se produjo en sociedad civil y medios de comunicación, con un descenso del 8%. Los medios de comunicación y la sociedad civil de Chile siguen siendo independientes y sólidos, pero se percibe que el interés público por la corrupción ha disminuido en los últimos años, a medida que temas como el crimen organizado y la economía han adquirido mayor prioridad.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Las medidas de la administración Boric para impulsar una Estrategia Nacional de Integridad Pública, que incluye planes para promulgar leyes que sirvan para regular los conflictos de interés en los cargos públicos, crear un nuevo canal de denuncias de corrupción, fortalecer la transparencia a nivel municipal, así como mejorar la legislación que regula el lobby.

Los electores rechazaron una propuesta para una nueva Constitución en el plebiscito de septiembre de 2022, y el Consejo Constitucional está redactando otro documento. Es probable que los principios de probidad, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción formen parte de una nueva propuesta de Constitución, que se someterá a un plebiscito el 17 de diciembre.



PERÚ

4
RANKING

5.53

Puntaje General 2023

5.66

Puntaje General 2022

5.66

Puntaje General 2021

5.47

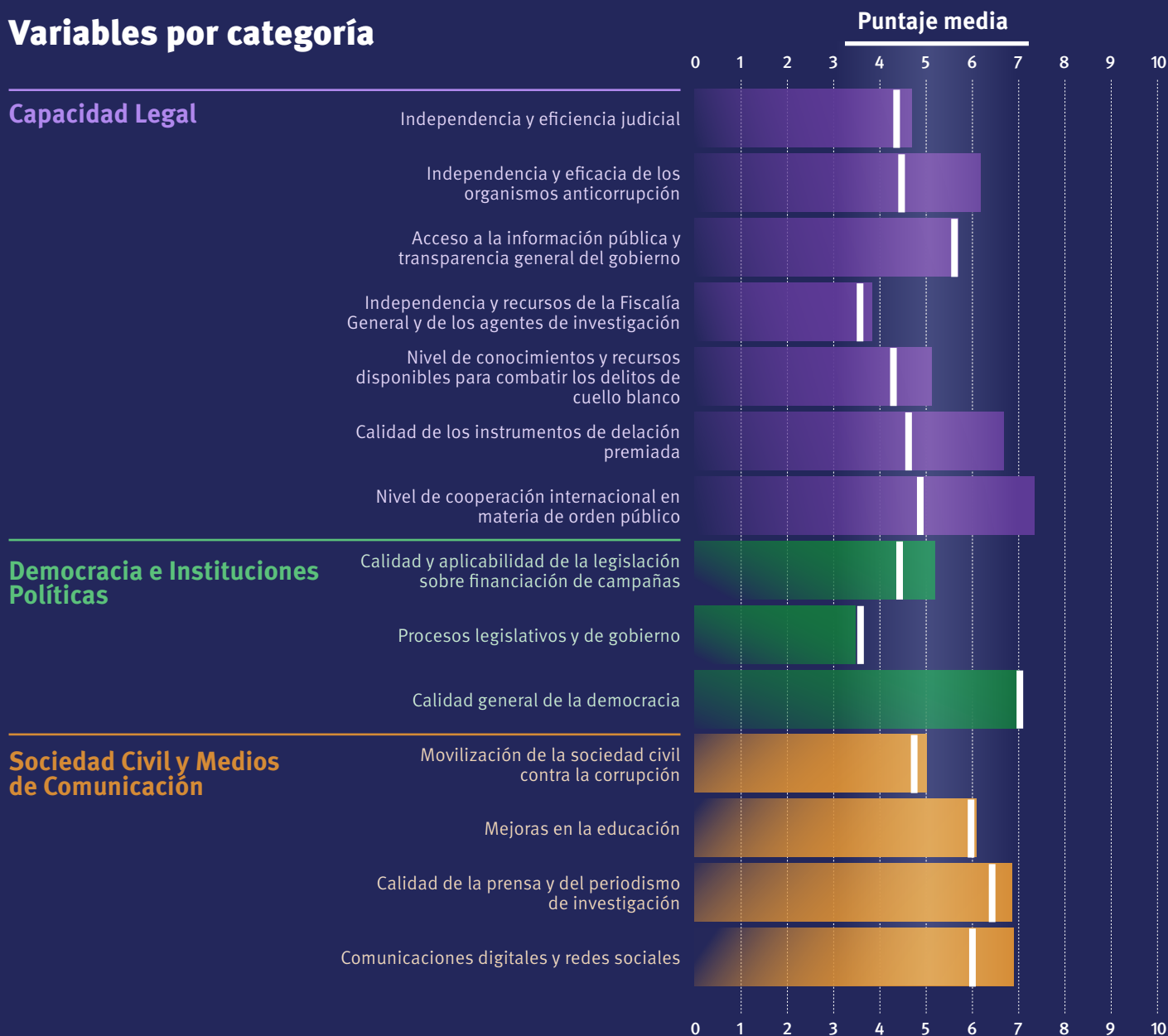
Puntaje General 2020

5.51 Capacidad Legal

5.21 Democracia e Instituciones Políticas

6.21 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





4

RANKING

PERÚ

A pesar de tener ligeros retrocesos en todas las categorías, Perú se mantuvo en el 4º puesto del Índice CCC, posición que ocupa desde 2021. El leve retroceso interanual de Perú en su puntuación global (un 2% menos) indica que aún estando en medio de una grave inestabilidad política el país ha sido capaz de hacer frente a la corrupción.

La destitución del expresidente Pedro Castillo, en una moción de vacancia en diciembre de 2022 tras su intento de disolver el Congreso en un autogolpe de Estado, ha exacerbado las tensiones políticas existentes. La destitución de Castillo, así como la corrupción y la desigualdad, motivaron protestas antigubernamentales a gran escala a finales de 2022 y principios de 2023. Castillo se encuentra en prisión preventiva acusado de conspiración y rebelión, y él ha negado haber cometido delito alguno.

A pesar de la incertidumbre política, las autoridades peruanas siguen llevando a cabo importantes investigaciones relacionadas con la corrupción. Los fiscales están investigando a Castillo y a la presidenta Dina Boluarte por el presunto lavado de activos. (Boluarte ha negado haber cometido delito alguno.) Perú ocupa el tercer lugar de la región en la variable que evalúa la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, que aumentó un 10% desde el 2022. El expresidente Alejandro Toledo fue extraditado de Estados Unidos a Perú en abril. Toledo, que presuntamente recibió 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas durante su presidencia, ha negado la acusación.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Boluarte ha prometido luchar contra la corrupción, pero es probable que su limitada gobernabilidad obstaculice cualquier intento de aprobar una legislación anticorrupción significativa. Los problemas de seguridad y los informes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas militares y policiales durante las protestas antigubernamentales tendrán prioridad sobre las cuestiones de corrupción.

Los nombramientos de cargos judiciales decisivos en un futuro próximo pueden estar marcados por la polarización. La selección de nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú está prevista para 2024. Entre otras funciones, la JNJ regula la selección de jueces, fiscales y otros funcionarios públicos.



5
RANKING

REPÚBLICA DOMINICANA

5.42

Puntaje General 2023

5.19

Puntaje General 2022

4.38

Puntaje General 2021

3.26

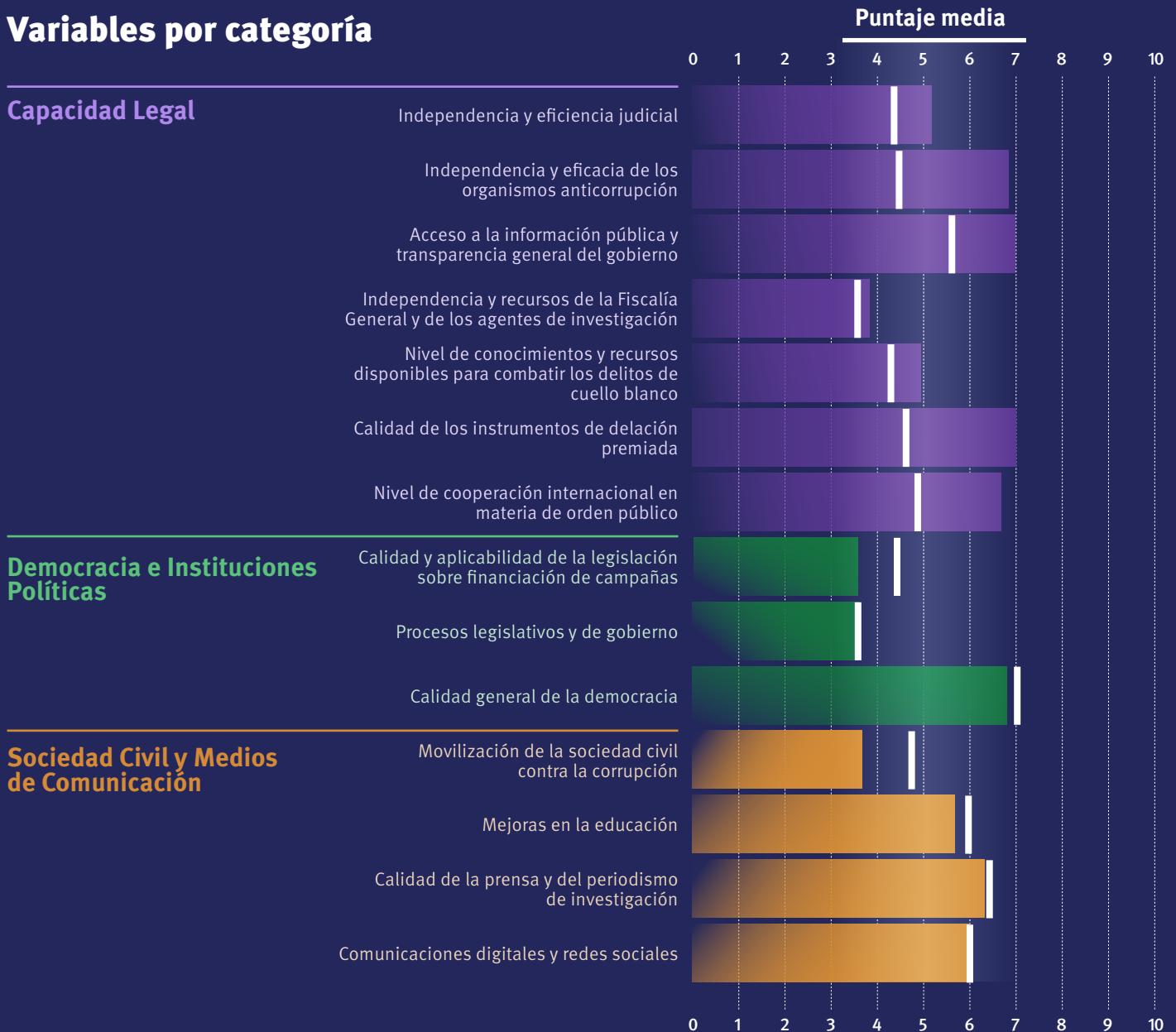
Puntaje General 2020

5.80 Capacidad Legal

4.50 Democracia e Instituciones Políticas

5.41 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





REPÚBLICA DOMINICANA

La República Dominicana ha mantenido su progreso en la lucha contra la corrupción, lo cual se refleja en una mejora del 4% que ha permitido al país conservar el quinto puesto en el Índice. La mayoría de los avances se registraron en la categoría de capacidad legal, que mejoró un 11% desde 2022, impulsado por avances significativos en las variables que evalúan a los instrumentos de delación premiada y a las agencias anticorrupción. Las variables que miden la independencia judicial y la independencia de la fiscalía general también experimentaron avances moderados.

Sin embargo, el país tuvo retrocesos en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación. La República Dominicana tiene pocas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción, y está por debajo del promedio regional en la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción. Desde que asumió el cargo en 2020, el presidente Luis Abinader ha hecho hincapié en la lucha contra la corrupción, lo que ha contribuido a un progreso constante en términos generales. En julio de 2022, Abinader promulgó una ley de extinción de dominio. No obstante, es probable que se necesiten más recursos para los organismos anticorrupción, así como recursos para hacer cumplir activamente la legislación anticorrupción en todos los ámbitos, que según los analistas siguen siendo limitados.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha continuado varias investigaciones anticorrupción de alto perfil durante el año pasado, por ejemplo la Operación Coral, Operación Coral 5G, Operación Antipulpo, Operación Medusa y Operación Calamar. Estas investigaciones se han centrado principalmente en funcionarios del gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Los funcionarios del gobierno actual que han sido asociados con presunta corrupción han sido despedidos o han renunciado.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

En mayo de 2024 se celebrarán elecciones generales, lo que aumentará el escrutinio sobre la financiación de las campañas. Aunque Abinader aún no ha anunciado su candidatura, se considera que es probable que busque la reelección.

Las investigaciones de corrupción de la PEPCA continuarán, pero es probable que sigan centradas en el PLD. Esto puede provocar manifestaciones esporádicas por parte de la oposición, como las protestas aisladas que se observaron en marzo de 2023.



PANAMÁ

6
RANKING

5.39

Puntaje General 2023

4.96

Puntaje General 2022

4.55

Puntaje General 2021

4.17

Puntaje General 2020

5.26 Capacidad Legal

5.62 Democracia e Instituciones Políticas

5.55 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría

Capacidad Legal

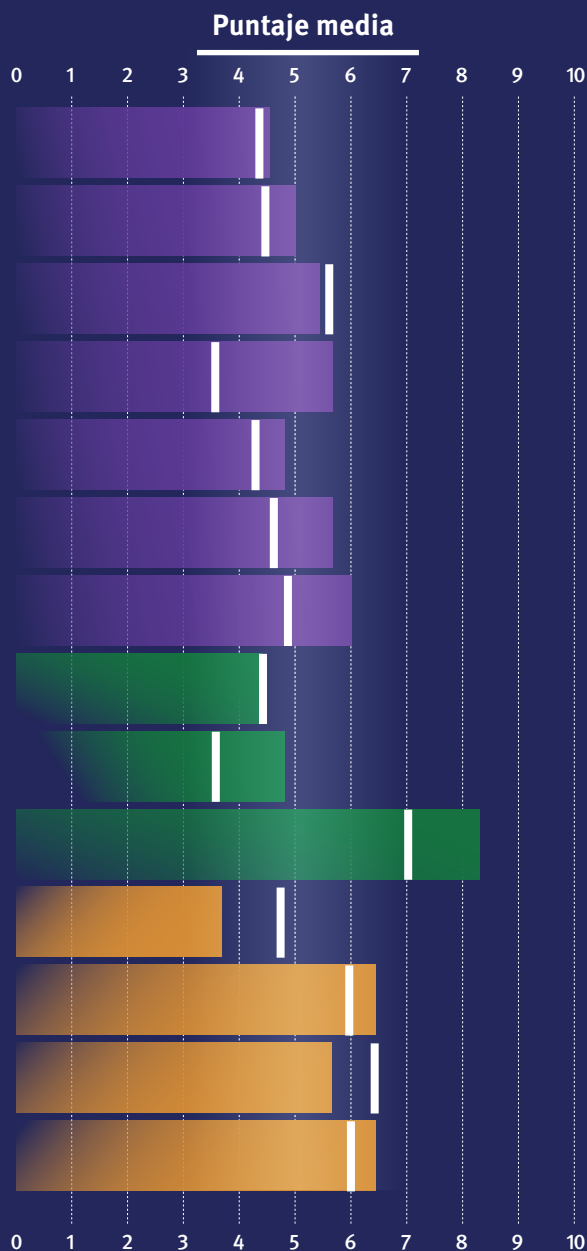
- Independencia y eficiencia judicial
- Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción
- Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno
- Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación
- Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco
- Calidad de los instrumentos de delación premiada
- Nivel de cooperación internacional en materia de orden público

Democracia e Instituciones Políticas

- Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas
- Procesos legislativos y de gobierno
- Calidad general de la democracia

Sociedad Civil y Medios de Comunicación

- Movilización de la sociedad civil contra la corrupción
- Mejoras en la educación
- Calidad de la prensa y del periodismo de investigación
- Comunicaciones digitales y redes sociales





PANAMÁ

.....

La puntuación general de Panamá aumentó un 9% en términos interanuales, continuando así la trayectoria ascendente de los últimos tres años en el Índice. La mayor parte de los avances se registraron en la categoría de capacidad legal (un 14% más desde 2022), y el rendimiento de Panamá en las otras dos categorías tuvo variaciones menores.

A lo largo del último año, Panamá vio mejoras en variables cruciales que evalúan los organismos anticorrupción y la fiscalía general. Investigaciones contra expresidentes por presunta corrupción han avanzado—Una jueza llamó a juicio a Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presunto blanqueo de capitales relacionado a sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. (Varela y Martinelli han negado haber actuado indebidamente.) En enero Estados Unidos señaló a Martinelli por “participación en corrupción significativa” por aceptar sobornos a cambio de contratos gubernamentales mientras era presidente, y concluyó en junio de 2023 un juicio a Martinelli y otras 14 personas por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business—Martinelli negó haber actuado indebidamente.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental mundial encargada de vigilar el lavado de activos y financiación del terrorismo, ha mantenido su escrutinio sobre las capacidades de Panamá en estas áreas. Aunque Panamá sigue en la “lista gris” de jurisdicciones del GAFI bajo una mayor observación, la organización señaló en junio de 2023 que Panamá había completado sustancialmente su plan de acción y realizado reformas clave. El GAFI llevará a cabo una evaluación in situ en Panamá y es posible que se haga un anuncio sobre su estatus en la lista gris más adelante en 2023. El país sigue formando parte de la lista emitida por la Unión Europea de los países no cooperantes en el ámbito fiscal.

En julio y agosto de 2022, las protestas del sindicato de docentes se extendieron y miles de personas participaron en manifestaciones para protestar contra la corrupción y el aumento del costo de la vida. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo aprobó algunas reformas para hacer frente a la corrupción, incluyendo una ley que obliga a los altos cargos del gobierno a declarar los conflictos de intereses en declaraciones juradas y un decreto creando una Comisión Ciudadana Contra la Corrupción.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Está programado que en agosto de 2023 comience el juicio contra 36 personas acusadas de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, entre ellas los expresidentes Varela y Martinelli.

Panamá celebrará elecciones generales en mayo de 2024, con primarias previstas entre junio y julio de 2023. Martinelli, que ganó las primarias de su partido, ha estado liderando las primeras encuestas.



ARGENTINA

7
RANKING

5.07

Puntaje General 2023

5.04

Puntaje General 2022

5.16

Puntaje General 2021

5.32

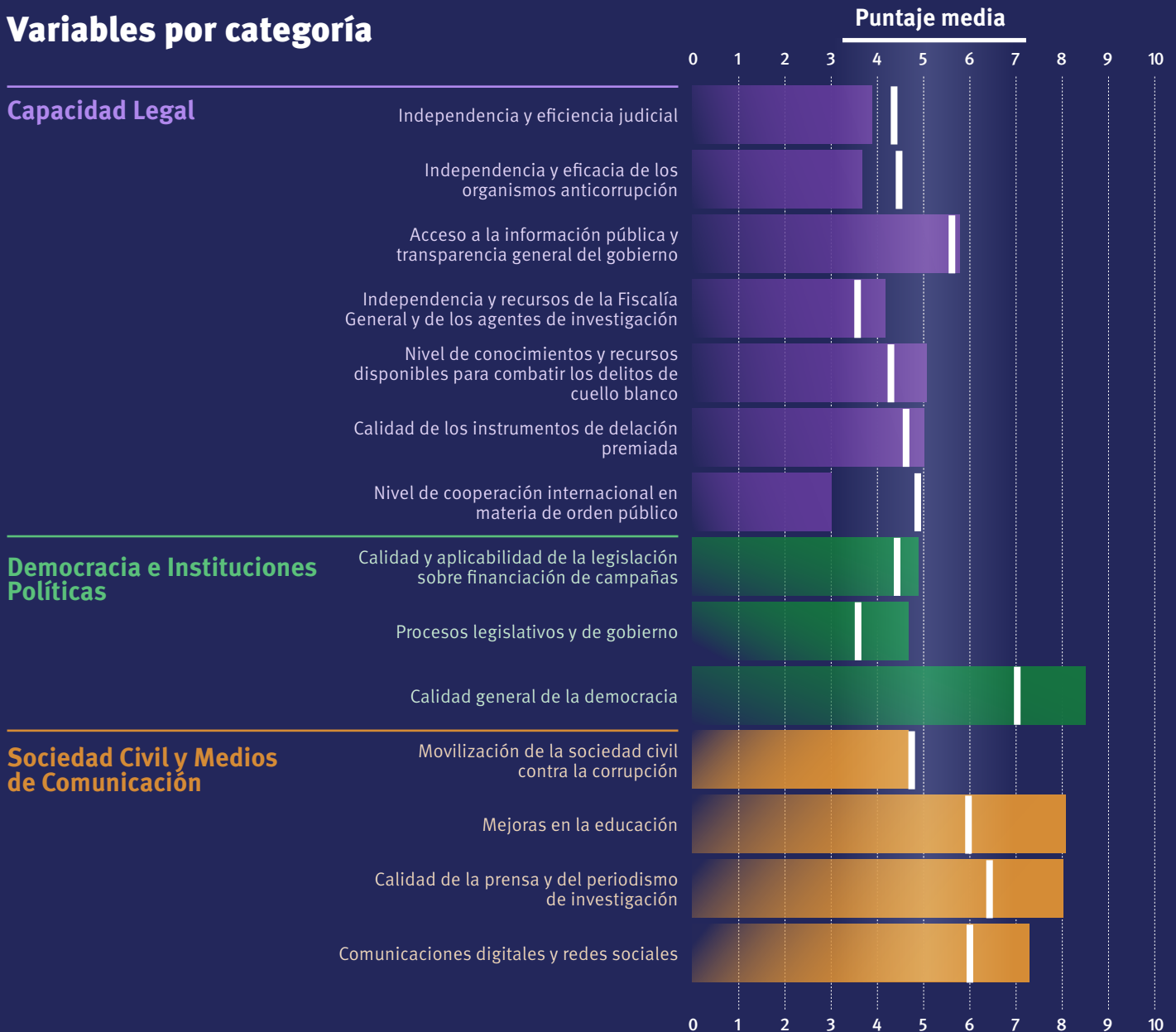
Puntaje General 2020

4.28 Capacidad Legal

5.86 Democracia e Instituciones Políticas

7.01 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





ARGENTINA

La puntuación de Argentina se mantuvo casi sin cambios respecto a la de 2022, estabilizándose tras una trayectoria negativa de tres años, aunque descendió del sexto al séptimo puesto en la clasificación general. Argentina experimentó pequeños retrocesos en dos categorías: sociedad civil y medios de comunicación, y democracia e instituciones políticas. Hubo una mejoría del 4% en comparación con el año anterior en la categoría de capacidad legal, impulsada por un aumento en la variable de evaluación de los organismos anticorrupción (aunque Argentina se sitúa en el décimo puesto a nivel regional en esta variable). Aun así, Argentina sigue por detrás de la media regional en términos de capacidad legal.

En diciembre de 2022, la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por presunta administración fraudulenta. Kirchner apeló la decisión, y el caso puede prolongarse durante años. Kirchner ha negado haber cometido delito alguno y ha denunciado una persecución judicial y política en su contra.

Las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial volvieron a saltar a la palestra en enero de 2023, cuando el presidente Alberto Fernández anunció su intención de pedir un juicio político al presidente de la Corte Suprema, a raíz de una disputa en torno a una asignación de fondos públicos que favorecía a la ciudad de Buenos Aires, controlada por la oposición. La destitución requeriría una mayoría de dos tercios en el Congreso y es poco probable.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Antes de las elecciones presidenciales en octubre, las encuestas de opinión indican que a la mayoría de los votantes les preocupa más la inflación que la corrupción. Es poco probable que se avance en las reformas anticorrupción hasta que concluya este ciclo electoral.

El gobierno ha anunciado medidas para hacer frente a la violencia, el crimen organizado y el lavado de activos en la provincia de Santa Fe. En marzo, la cámara baja del Congreso aprobó un proyecto de ley destinado a reforzar el sistema judicial de la provincia mediante la creación de nuevos cargos de fiscales, defensores públicos y jueces. Los grupos de delincuencia organizada de la zona utilizan técnicas de lavado de activos cada vez más sofisticadas, y la Unidad de Información Financiera tiene planes de abrir una oficina en la provincia.



BRASIL

8
RANKING

4.83

Puntaje General 2023

4.76

Puntaje General 2022

5.07

Puntaje General 2021

5.52

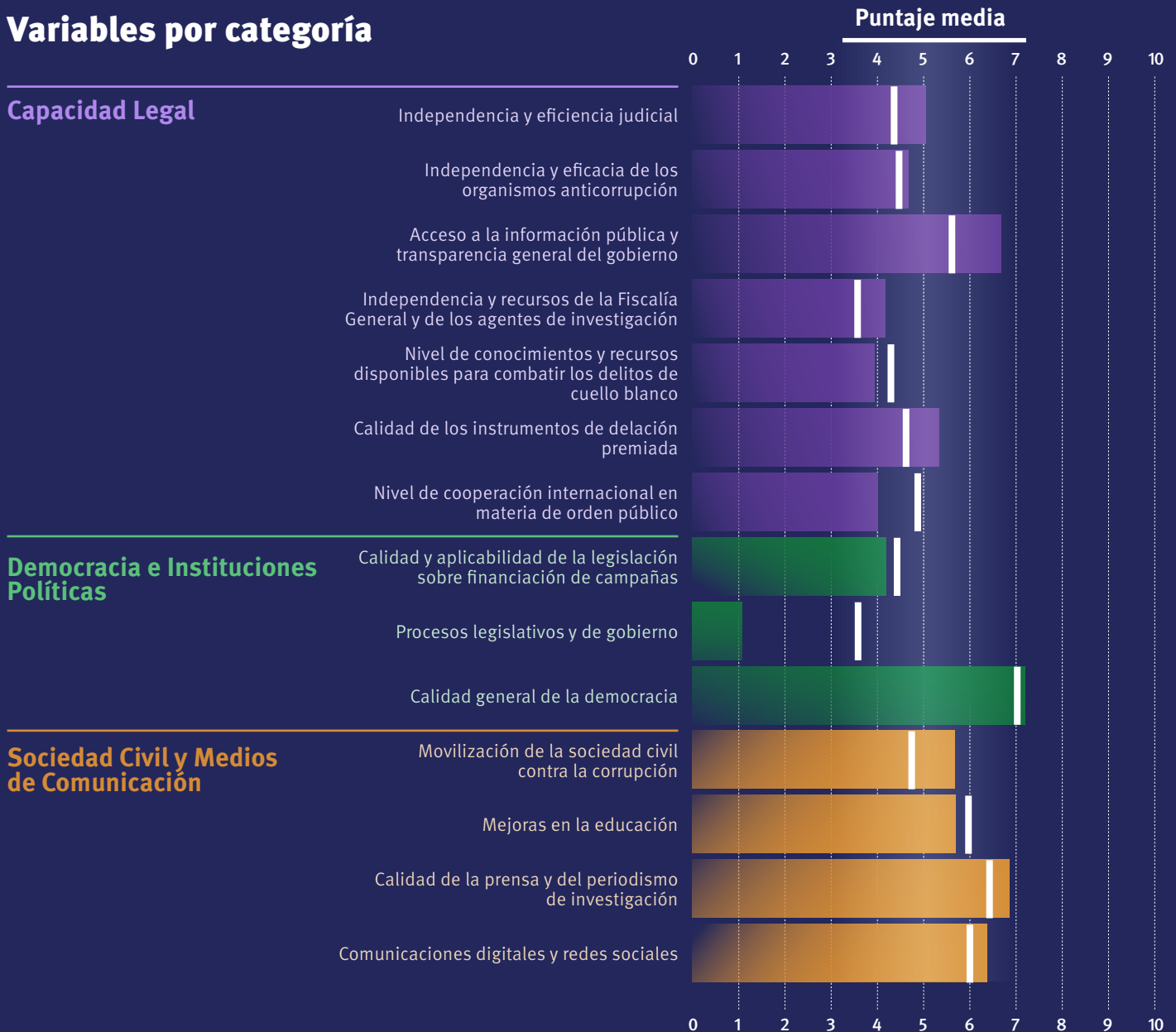
Puntaje General 2020

4.80 Capacidad Legal

4.16 Democracia e Instituciones Políticas

6.15 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





8

RANKING

BRASIL

.....

Después de tres años de descenso en el Índice, la puntuación global de Brasil se mantuvo relativamente estable, con un aumento interanual del 1.5%. La puntuación de Brasil en la categoría de democracia e instituciones políticas aumentó, lo cual refleja su fortaleza tras varios años de tensiones. Dentro de la categoría de capacidad legal, el país registró mejoras en las variables que evalúan la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción y del poder judicial.

Los intentos realizados por el expresidente Jair Bolsonaro durante su mandato de influir políticamente las investigaciones afectaron los esfuerzos anticorrupción en los últimos años. Es posible que estos órganos de supervisión recuperen cierta autonomía bajo la actual administración. Sin embargo, existen acontecimientos que pueden contrarrestar las mejoras en la lucha contra la corrupción. Entre estos se encuentran posibles cambios a la ley que regula los nombramientos políticos en empresas estatales y la intención declarada del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de no escoger al próximo fiscal general a partir de una lista presentada por la Asociación Nacional de Fiscales Públicos, una tradición que Bolsonaro tampoco siguió.

El mayor retroceso de Brasil en cuanto a variables se dio en la calidad de los procesos legislativos y de gobierno. Aunque el Supremo Tribunal declaró inconstitucional la opaca práctica del “*orçamento secreto*” (presupuesto secreto), las negociaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo siguen condicionadas a las prácticas del *pork-barrel*, es decir, el uso de recursos públicos en proyectos que tienen fines electorales. Brasil registró un descenso del 4% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, ya que estos actores se enfocaron menos en la corrupción y más en la preocupación por las instituciones democráticas y la legitimidad del proceso electoral tras las elecciones de 2022 y los disturbios del 8 de enero.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Lula tiene la prerrogativa de nombrar a dos magistrados para el Supremo Tribunal en 2023, a reserva de la aprobación del Senado. El mandato del actual fiscal general, Augusto Aras, expira en septiembre, y Lula decidirá si mantiene a Aras o nombra a un nuevo fiscal general.

Los observadores vigilarán cómo gestiona el gobierno su relación con los diputados federales y los senadores, y hasta qué punto esta relación se desarrolla de forma transparente, o si surgen nuevos mecanismos opacos para sustituir el presupuesto secreto.

Las investigaciones continuarán sobre presunta corrupción durante el gobierno de Bolsonaro, lo que podría inhabilitarlo como candidato para las elecciones de 2026.



9
RANKING

COLOMBIA

4.78

Puntaje General 2023

4.87

Puntaje General 2022

4.81

Puntaje General 2021

5.18

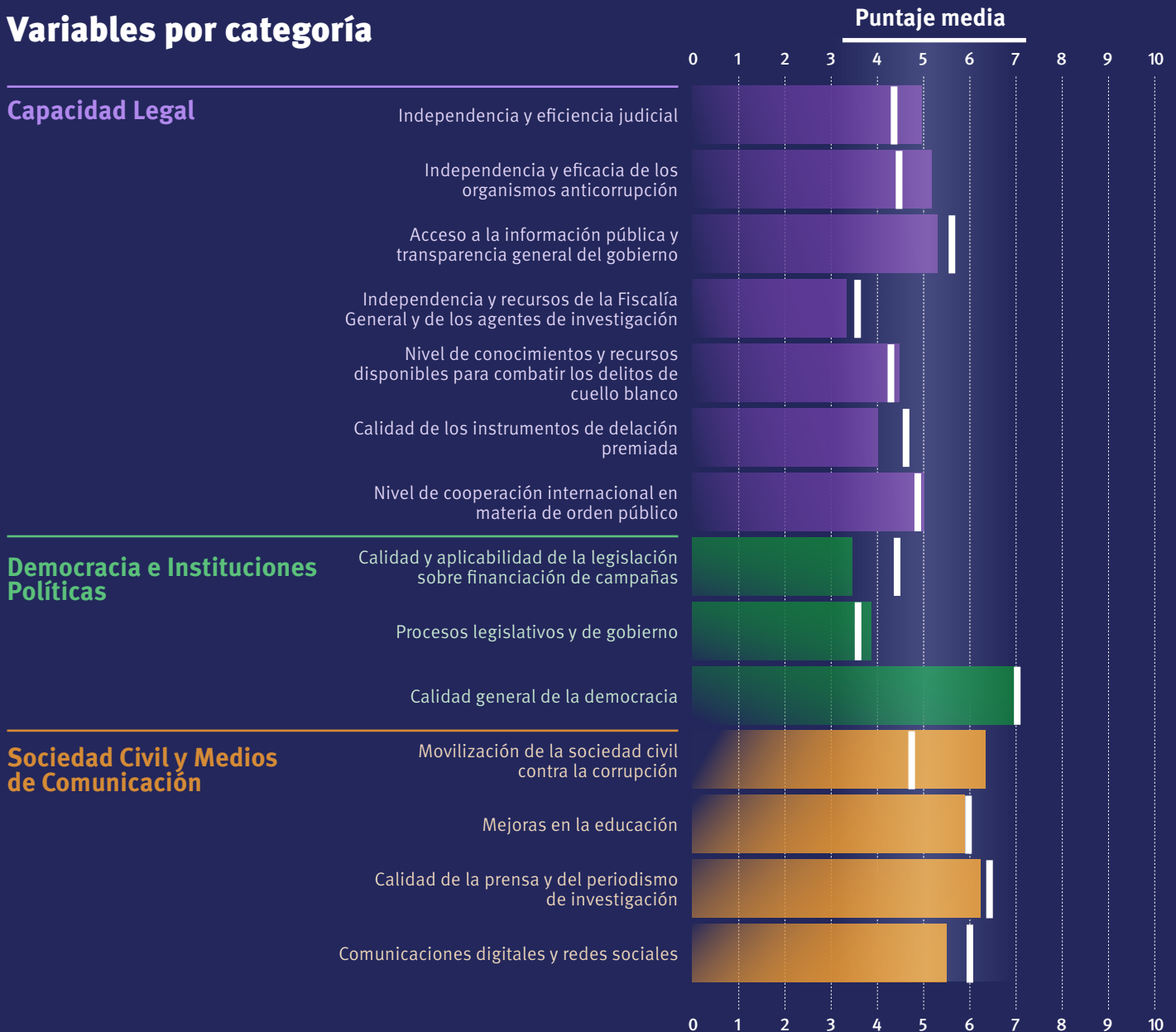
Puntaje General 2020

4.58 Capacidad Legal

4.58 Democracia e Instituciones Políticas

5.99 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





COLOMBIA

La puntuación de Colombia se mantuvo relativamente estable, con un descenso del 2%, lo que hizo que cayera del octavo al noveno puesto en la clasificación general. La puntuación de Colombia descendió sobre todo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación (un 7%), seguida por la de capacidad legal (un 2%). Hubo una mejora moderada en la categoría de democracia e instituciones políticas, invirtiendo una previa tendencia a la baja, pero Colombia sigue por detrás de la media regional en esa categoría.

El presidente Gustavo Petro, en el cargo desde agosto de 2022, hizo de la lucha contra la corrupción un elemento clave de su campaña presidencial, pero hasta ahora no ha traducido estas declaraciones en una estrategia anticorrupción clara. El gobierno ha invertido su influencia política en promover otras prioridades políticas, como su iniciativa de "paz total" e importantes reformas reguladoras en sectores clave como la salud, el trabajo y las pensiones. Las tensiones han aumentado entre Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa. El Presidente dijo que, como Jefe de Estado, era el jefe de Barbosa. En respuesta, Barbosa dijo que la declaración atentaba contra la independencia judicial. Las acusaciones de corrupción han alcanzado al presidente y su círculo íntimo. La Fiscalía General anunció investigaciones al hijo y al hermano de Petro por presuntamente haber aceptado pagos irregulares. Ambos han negado haber cometido irregularidades. En junio, la Fiscalía General abrió una investigación relativa al financiamiento de la campaña de 2022 de Petro, quien negó haber cometido irregularidades.

En octubre de 2022, el Congreso ratificó el Acuerdo de Escazú, que refuerza el acceso a la información y la transparencia en la gestión de los fondos destinados a la protección del medio ambiente, así como la protección de informantes. Global Witness registró 65 asesinatos de defensores del medioambiente en Colombia en 2020.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

El Plan Nacional de Desarrollo de la administración Petro, que el Congreso aprobó en mayo, orientará las políticas públicas del gobierno nacional, incluidas las relacionadas con la lucha contra la corrupción.

Las investigaciones continuarán sobre sobornos a cambio de contratos de obras públicas de la constructora brasileña Odebrecht. En febrero de 2023, el fiscal general anunció que otras 16 personas fueron vinculadas al caso.



ECUADOR

10
RANKING

4.68

Puntaje General 2023

4.82

Puntaje General 2022

4.77

Puntaje General 2021

4.19

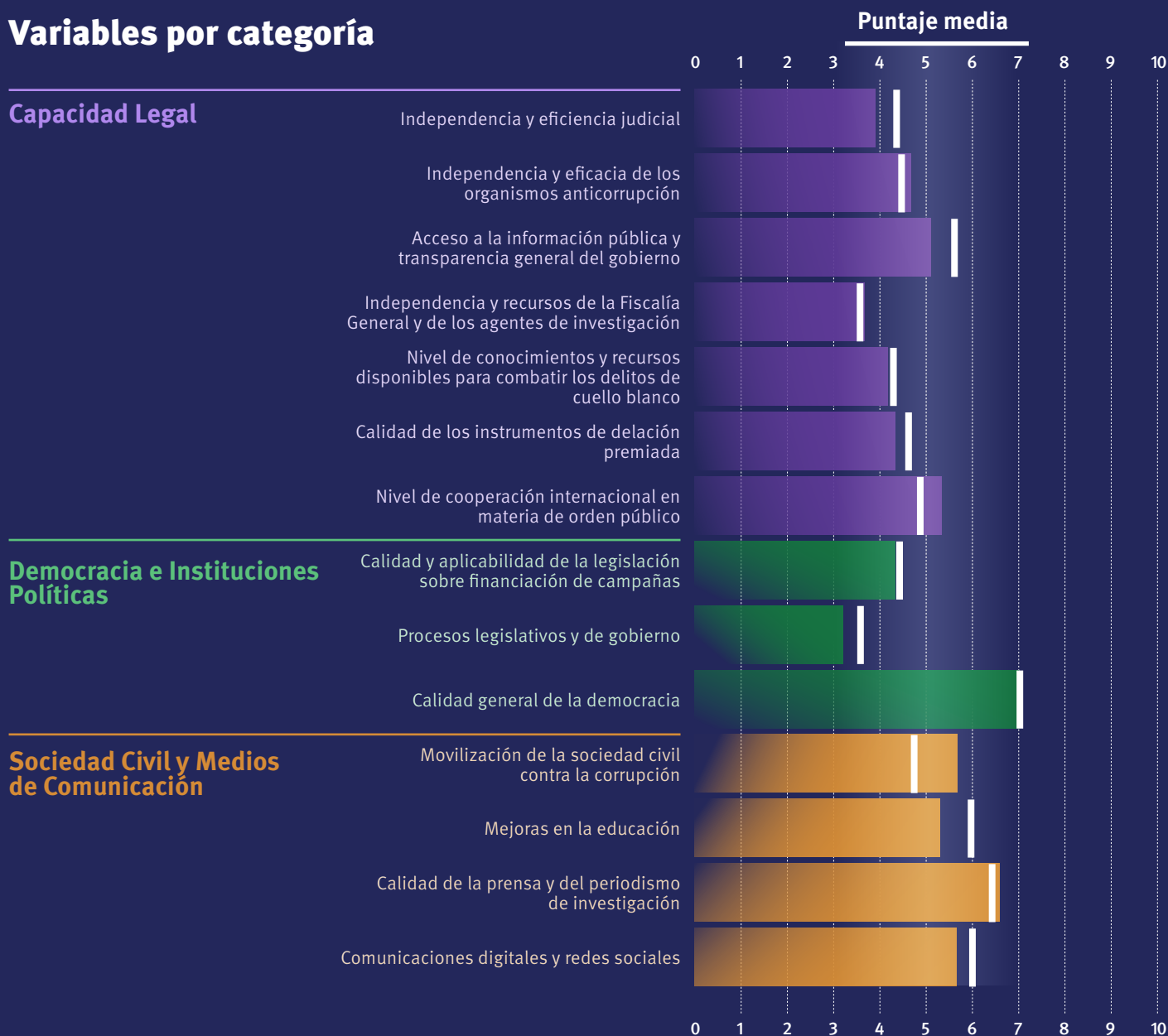
Puntaje General 2020

4.39 Capacidad Legal

4.76 Democracia e Instituciones Políticas

5.80 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





10
RANKING

ECUADOR

La puntuación de Ecuador experimentó un ligero descenso interanual del 3%, lo que le hizo caer del noveno al décimo puesto en el Índice. A pesar de la incertidumbre política generada por el juicio político del presidente Guillermo Lasso, el entorno anticorrupción de Ecuador se mantuvo relativamente estable durante el año pasado.

Ecuador presentó una variación mínima en las categorías de democracia e instituciones políticas y de sociedad civil y medios de comunicación. El cambio en su puntuación global se vio provocado por los retrocesos en la categoría de capacidad legal, que descendió un 6% en términos interanuales. Dentro de esa categoría, Ecuador experimentó sus mayores retrocesos en las variables que evalúan las agencias anticorrupción y la cooperación internacional en materia de orden público. A principios de este año, los votantes rechazaron el referéndum de ocho preguntas de Lasso que habría autorizado la extradición por delincuencia organizada. En febrero, el país aprobó una nueva ley sobre transparencia y acceso a la información pública, un área en la que Ecuador se sitúa por debajo del promedio del Índice.

Informes periodísticos sobre presunta corrupción en empresas públicas condujeron a un juicio político contra Lasso en mayo. El presidente negó haber cometido irregularidades. Lasso invocó un mecanismo constitucional para disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas, y declaró que no sería candidato. Algunos analistas cuestionaron la solidez de los cargos contra Lasso, cuya popularidad era baja en un contexto en el que la violencia relacionada con el crimen organizado había aumentado recientemente en Ecuador. En un caso aparte, en marzo se presentaron cargos contra el expresidente Lenín Moreno, junto con otras 36 personas, por presunta corrupción relacionada con un contrato de una central hidroeléctrica. Moreno ha negado haber cometido delito alguno.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Ecuador celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 20 de agosto. Las condiciones del mecanismo constitucional permiten a Lasso gobernar por decreto, previa aprobación de la Corte Constitucional, hasta que los nuevos funcionarios electos inicien sus mandatos.



PARAGUAY

11
RANKING

4.61

Puntaje General 2023

4.45

Puntaje General 2022

4.08

Puntaje General 2021

3.88

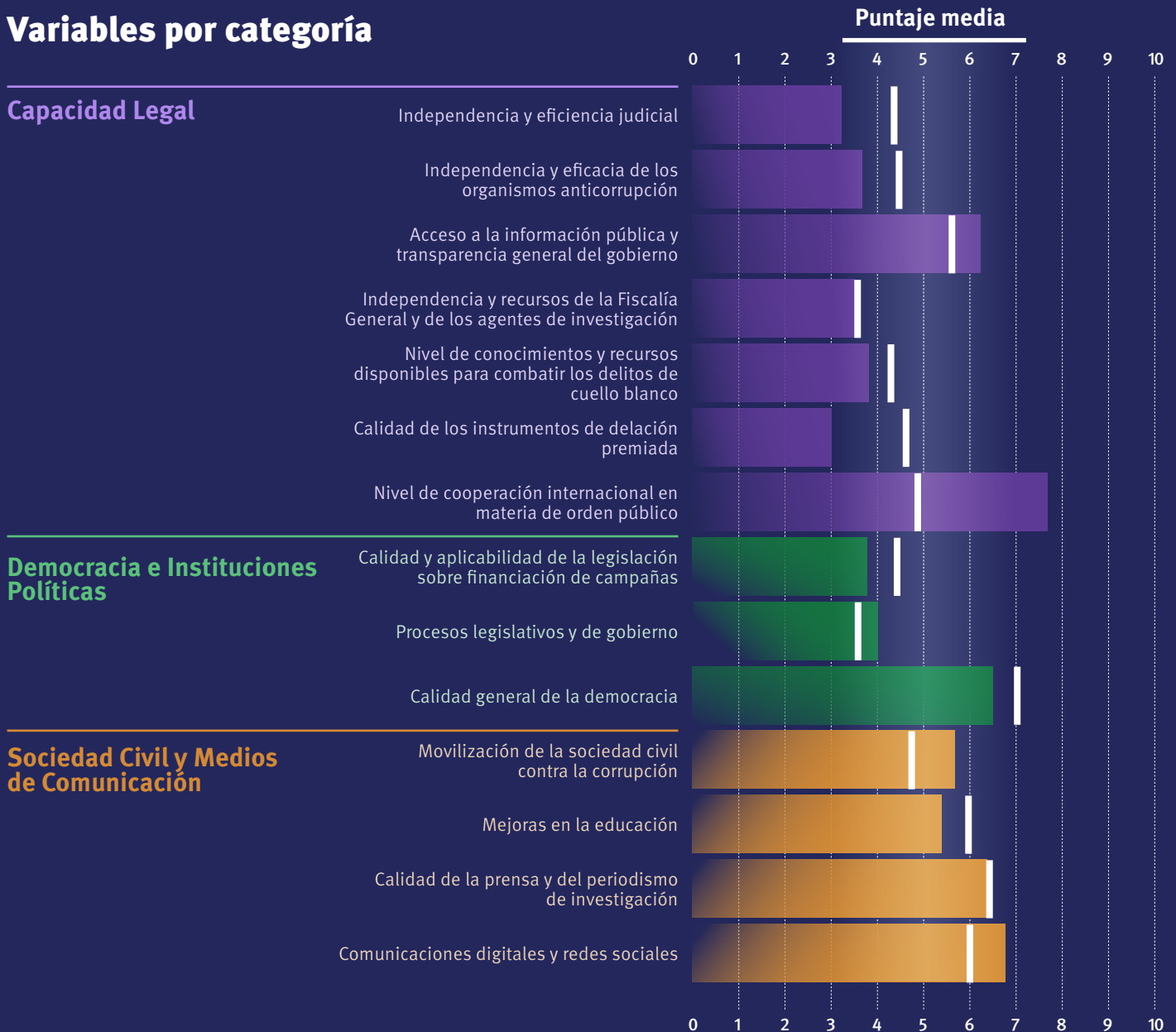
Puntaje General 2020

4.27 Capacidad Legal

4.61 Democracia e Instituciones Políticas

6.05 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





PARAGUAY

.....

La puntuación de Paraguay aumentó un 4%, continuando una tendencia positiva de cuatro años, aunque se mantuvo en el puesto 11 de la clasificación general. El país registró mejoras moderadas en términos interanuales en las tres categorías. Paraguay superó el promedio regional en la variable que mide la movilización de la sociedad civil contra la corrupción y continuó su trayectoria ascendente en la variable que evalúa la cooperación internacional en materia de orden público, empatando con Costa Rica en el primer puesto.

Este desempeño se produjo tras las acusaciones de corrupción que apuntan al gobernante Partido Colorado. En 2022, Estados Unidos señaló al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez por "corrupción significativa". En enero de 2023, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Cartes y Velázquez, quienes han negado haber cometido irregularidades. En marzo de 2023, la fiscalía general de Paraguay inició una investigación en torno a las acusaciones presentadas por Estados Unidos.

Los esfuerzos del país contra el lavado de dinero han avanzado. Tras una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2022, que señaló una mejora significativa en el sistema antilavado de activos y contra financiamiento del terrorismo de Paraguay, la organización no incluyó a Paraguay en su "lista gris".

A pesar de este progreso, Paraguay se mantiene por debajo de la media regional en su puntuación general, dado que existen graves problemas que siguen socavando los esfuerzos anticorrupción. La violencia y el crimen organizado han afectado las investigaciones—en mayo de 2022 fue asesinado un fiscal que desempeñaba un papel importante en una amplia operación contra el tráfico de drogas—y la politización es un obstáculo persistente. La anterior fiscal general fue objeto de críticas públicas por su aparente falta de voluntad para perseguir los casos de corrupción en los que estaba implicado el partido gobernante.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

El compromiso del presidente electo, Santiago Peña, con la lucha contra la corrupción. Peña, del gobernante Partido Colorado, obtuvo el 43% de los votos en las elecciones de abril y asumirá el cargo en agosto. Peña mantiene estrechos vínculos con el expresidente Cartes, que preside el Partido Colorado y ejerce una considerable influencia política.

La presión de Estados Unidos en forma de señalamientos o sanciones relacionadas con la corrupción puede incentivar a Paraguay a mejorar la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.



MÉXICO

12
RANKING

3.87

Puntaje General 2023

4.05

Puntaje General 2022

4.25

Puntaje General 2021

4.55

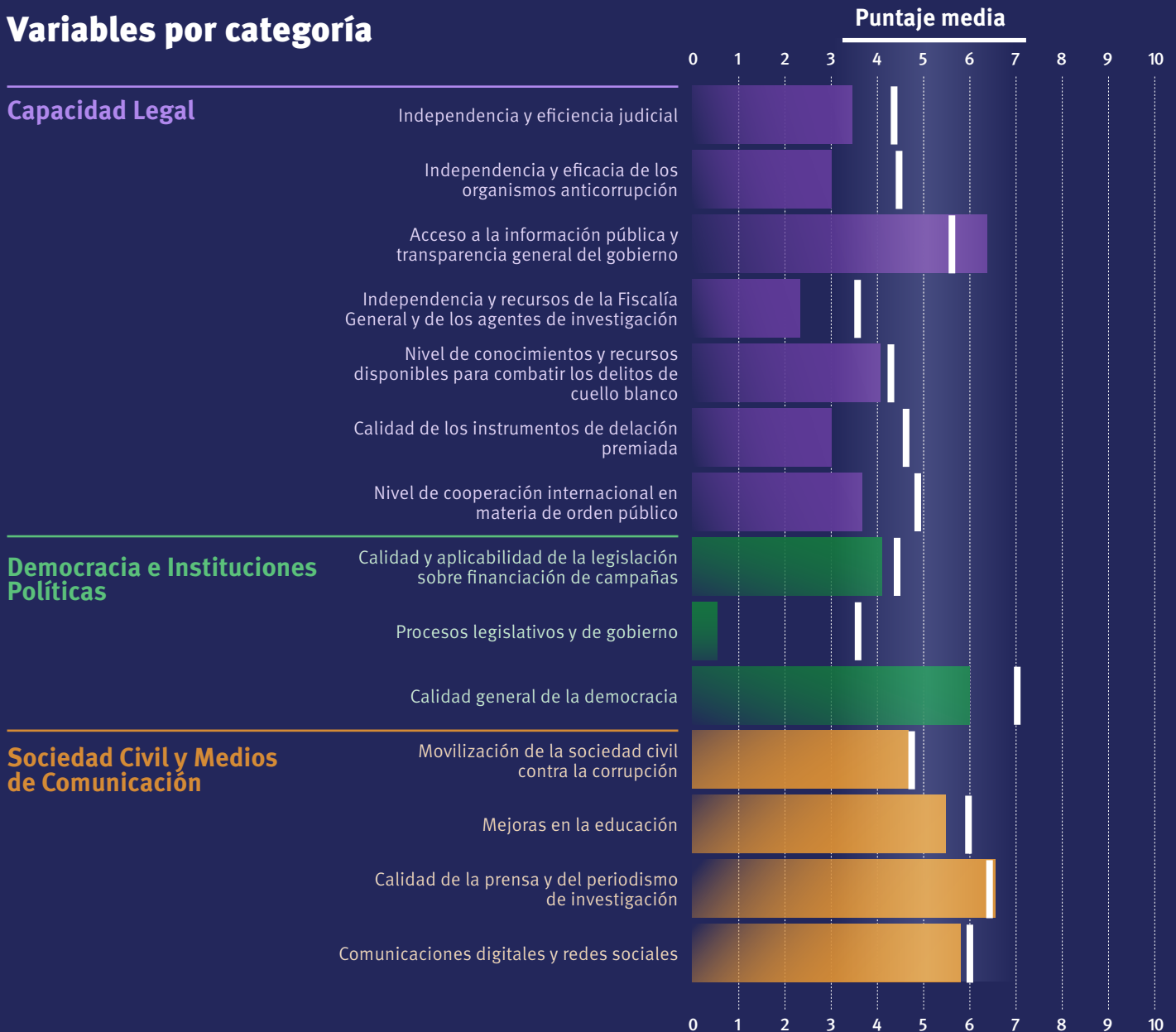
Puntaje General 2020

3.56 Capacidad Legal

3.62 Democracia e Instituciones Políticas

5.62 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





12

RANKING

MÉXICO

La puntuación de México continuó su tendencia a la baja por cuarto año consecutivo, con un descenso del 4%, pero conservando su duodécimo lugar en la en el ranking. El descenso más pronunciado se produjo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, ya que los periodistas mexicanos siguen enfrentándose a condiciones de trabajo adversas, incluida la tasa de violencia contra periodistas más alta del mundo fuera de Ucrania. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) siguió criticando duramente a periodistas y miembros de la sociedad civil, y surgieron nuevas acusaciones sobre el uso del software espía Pegasus en contra de periodistas, activistas y el subsecretario de Derechos Humanos de México (el gobierno niega haber actuado indebidamente). Mientras tanto, las recientes protestas a gran escala se han enfocado en la controvertida reforma del presidente para recortar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que la corrupción ha sido menos el centro de atención de las protestas en los últimos años.

México está por debajo del promedio regional en la categoría de capacidad legal y tuvo un retroceso interanual de 14% en la variable que evalúa a los organismos anticorrupción. AMLO ha seguido criticando a organismos independientes como el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Dicho organismo carece del quórum necesario para operar desde abril de 2023, cuando AMLO vetó a los comisionados que había nombrado el Senado. Desde inicios de junio, dos órdenes judiciales han permitido que el INAI tenga dos sesiones extraordinarias sobre dos casos específicos sin el quórum necesario.

En abril, el Senado aprobó un proyecto de ley que otorga a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la supervisión de las adquisiciones y el gasto público, lo que puede afectar a la rendición de cuentas en las compras públicas. Las deficiencias institucionales del país en materia de lucha contra la corrupción siguen obstaculizando la resolución de casos de corrupción.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

A pesar de que hubo un incremento en el presupuesto para las instituciones anticorrupción bajo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para 2023, el programa sigue enfrentando desafíos de implementación. AMLO se mantiene crítico de este mecanismo e introdujo una iniciativa para eliminar su Secretaría Ejecutiva.

Las autoridades investigan un caso relacionado con el presunto desfalco de cientos de millones de dólares de la agencia mexicana para la seguridad alimentaria (Segalmex) entre 2019 y 2021.

México tendrá elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores en junio de 2024. La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes y puede estar presente en las campañas.



GUATEMALA

13
RANKING

2.86

Puntaje General 2023

3.38

Puntaje General 2022

3.84

Puntaje General 2021

4.04

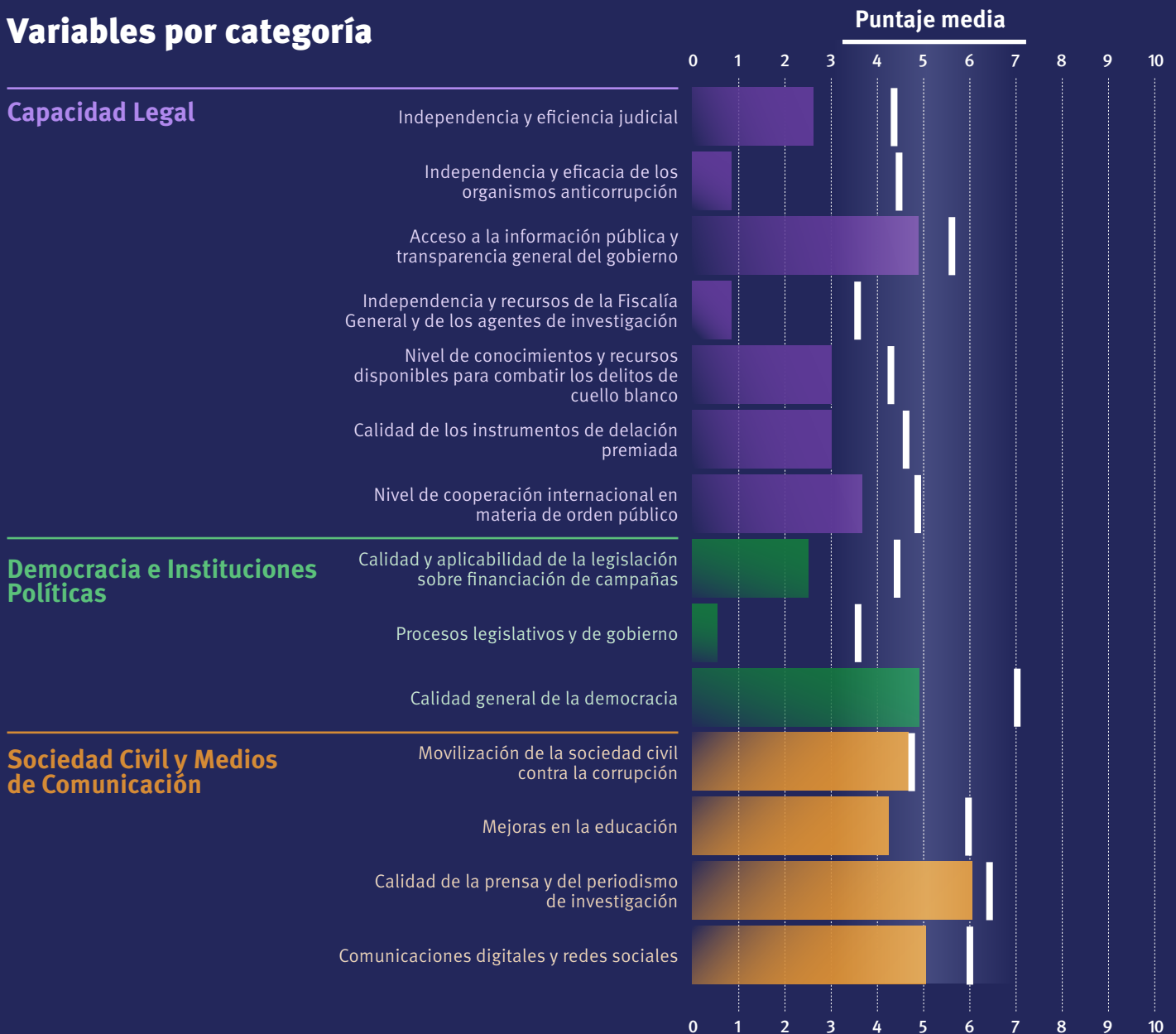
Puntaje General 2020

2.46 Capacidad Legal

2.62 Democracia e Instituciones Políticas

5.00 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





13
RANKING

GUATEMALA

Guatemala registró el descenso más pronunciado en el Índice de todos los países en 2023 (un 15% en términos interanuales), consolidando una trayectoria descendente de cuatro años. Aunque Guatemala se mantuvo en la décimo tercera posición, ahora se sitúa más cerca del décimo cuarto puesto ocupado por Bolivia que del duodécimo ocupado por México. Guatemala registró descensos especialmente pronunciados en dos categorías: capacidad jurídica (20%) y democracia e instituciones políticas (16%).

El Índice registró retrocesos sustanciales en variables clave, que reflejan el retroceso democrático percibido en el último año. Estas variables evalúan los procesos legislativos y de toma de decisiones (56% menos, alcanzando el nivel más bajo en cinco años), la eficacia e independencia de los organismos anticorrupción (un 38% menos) y la independencia del Ministerio Público (50% menos). Estados Unidos ha señalado a la fiscal general por “corrupción significativa” e incluyó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la Lista Engel de actores corruptos. El Ministerio Público ha continuado con un patrón de persecución judicial y detenciones, lo que ha llevado a que en 2022 al menos 20 jueces y fiscales anticorrupción huyeran de Guatemala. Los periodistas críticos con el gobierno se enfrentan de forma creciente a desafíos legales, como ilustró el encarcelamiento en julio de 2022 del director del diario *elPeriódico*, Jose Rubén Zamora.

Guatemala registró modestas mejoras en dos variables. Los avances en la movilización de la sociedad civil contra la corrupción (8% más) y en las comunicaciones digitales y las redes sociales (5% más) indican que los ciudadanos están exigiendo la rendición de cuentas. En agosto y septiembre de 2022 se produjeron en Ciudad de Guatemala muy concurridas manifestaciones públicas en contra de la corrupción percibida y la falta de independencia judicial. La capital también fue testigo de protestas a pequeña escala en noviembre.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala el 25 de junio, Sandra Torres y Bernardo Arévalo avanzarán a la segunda vuelta el 20 de agosto. Es probable que el énfasis de este último en la lucha contra la corrupción se convierta en un tema importante en la segunda vuelta.

Es probable que la próxima administración, que tomará posesión en enero de 2024, se enfrente a importantes presiones para hacer frente a la corrupción en medio del creciente descontento popular.



BOLIVIA

14
RANKING

2.56

Puntaje General 2023

2.57

Puntaje General 2022

2.43

Puntaje General 2021

2.71

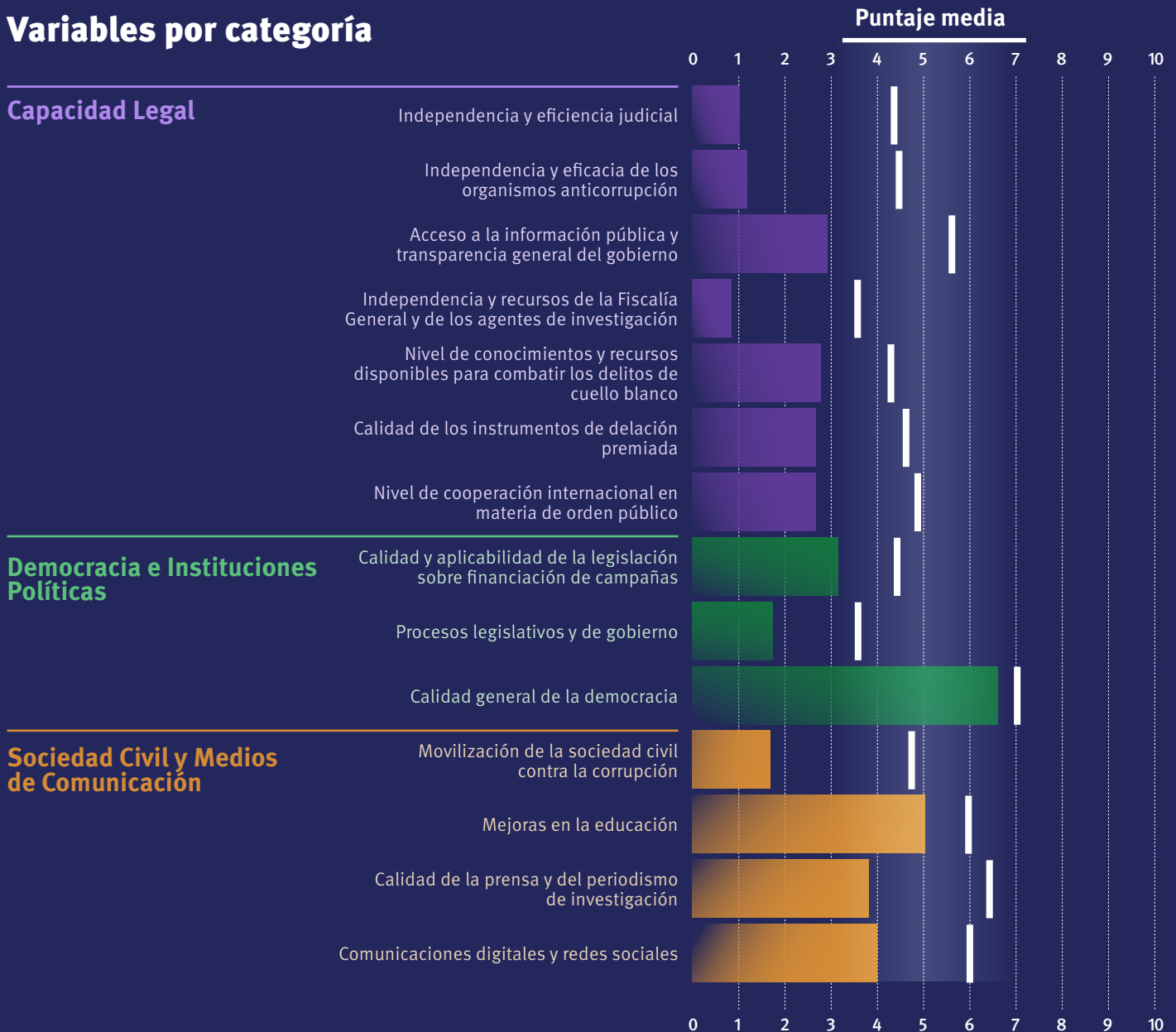
Puntaje General 2020

1.83 Capacidad Legal

3.72 Democracia e Instituciones Políticas

3.62 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





14
RANKING

BOLIVIA

Bolivia se mantuvo en el puesto 14 del Índice, posición que ocupa desde el 2020. El país experimentó su retroceso más significativo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, que disminuyó un 10%. El descenso en la variable que evalúa la calidad de prensa refleja cómo los medios de comunicación independientes de Bolivia continúan escudriñando la corrupción, pero carecen de los recursos para llevar a cabo investigaciones de manera consistente. Bolivia tuvo un retroceso del 17% en la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción—en medio de las restricciones gubernamentales, las pocas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la transparencia han tenido un impacto limitado.

Bolivia sólo está por delante de Venezuela en la variable que evalúa la independencia judicial, y los analistas han señalado la continua politización del sistema judicial boliviano durante el último año. La expresidenta interina Jeanine Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por tomar "decisiones que eran contrarias a la Constitución" como presidenta; ella ha negado los cargos. El gobernador de Santa Cruz y destacado líder de la oposición, Luis Fernando Camacho, fue arrestado en diciembre de 2022 por presuntos cargos de terrorismo en relación con la destitución en 2019 del expresidente Evo Morales. Camacho ha negado haber cometido delito alguno. Estados Unidos, la Unión Europea y destacadas instituciones de derechos humanos han señalado que estas decisiones están motivadas por cuestiones políticas.

En febrero de 2023, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 4872, o Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción. La medida tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción mediante la digitalización de la información y la coordinación con la sociedad civil, además de reconocer el papel del sector privado en la implementación del cumplimiento.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Las elecciones judiciales están previstas para octubre de 2023, cuando los votantes elegirán a los miembros del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Las tensiones políticas pueden aumentar, dado que la Asamblea Legislativa preselecciona a los candidatos antes de que se celebre la votación popular. Las anteriores elecciones judiciales de 2011 y 2017 estuvieron marcadas por la abstención y los votos en blanco o nulos.

Las investigaciones relacionadas con la corrupción emprendidas contra oponentes políticos pueden continuar a medida que aumenten las divisiones en el seno del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).



15
RANKING

VENEZUELA

1.46

Puntaje General 2023

1.63

Puntaje General 2022

1.40

Puntaje General 2021

1.52

Puntaje General 2020

0.81 Capacidad Legal

1.28 Democracia e Instituciones Políticas

4.57 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría

Capacidad Legal

- Independencia y eficiencia judicial
- Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción
- Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno
- Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación
- Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco
- Calidad de los instrumentos de delación premiada
- Nivel de cooperación internacional en materia de orden público

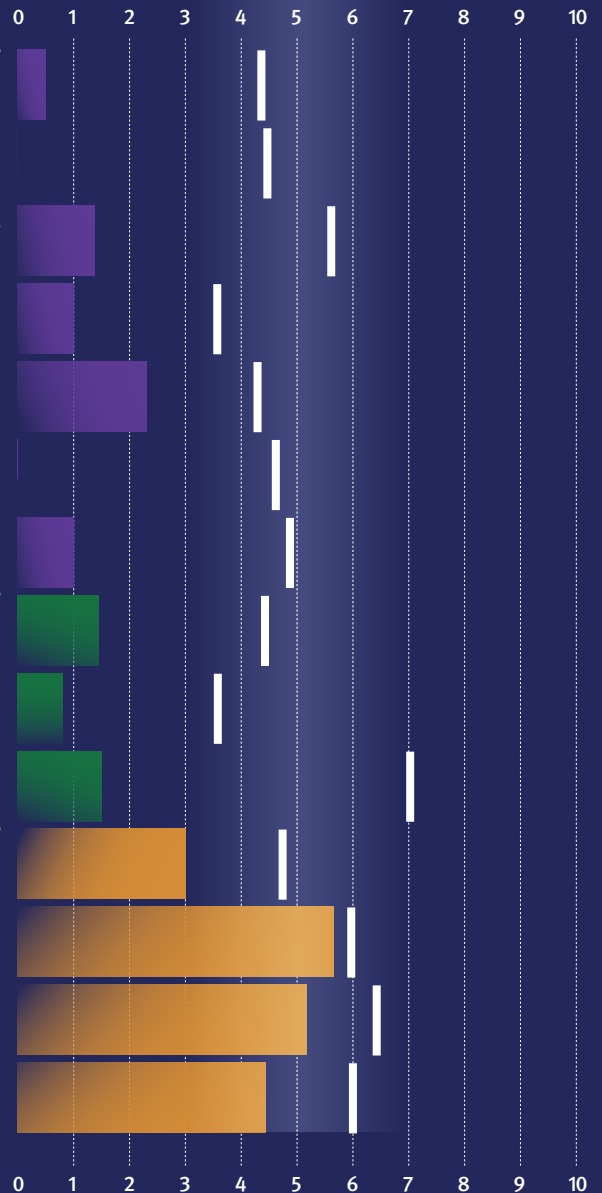
Democracia e Instituciones Políticas

- Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas
- Procesos legislativos y de gobierno
- Calidad general de la democracia

Sociedad Civil y Medios de Comunicación

- Movilización de la sociedad civil contra la corrupción
- Mejoras en la educación
- Calidad de la prensa y del periodismo de investigación
- Comunicaciones digitales y redes sociales

Puntaje media





15
RANKING

VENEZUELA

Venezuela ocupa el último lugar en el ranking del Índice, posición que ha ocupado por quinto año consecutivo con la puntuación más baja de la región. Tras unos modestos avances en 2022, Venezuela sufrió retrocesos en cada una de las tres categorías en 2023.

La variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó un 18%, mientras que la variable que evalúa la calidad de la prensa cayó un 15%, situando a Venezuela en el penúltimo lugar de ambas variables. Estos cambios reflejan las renovadas amenazas a la libertad de prensa y a las libertades civiles por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En enero, la Asamblea Nacional (controlada por el PSUV de Maduro) aprobó un proyecto de ley que obliga a todas las organizaciones no gubernamentales a declarar sus bienes y revelar al gobierno sus relaciones con donantes. Varias destacadas organizaciones internacionales anticorrupción y de derechos humanos denunciaron la medida, que temen que facilite la persecución de las organizaciones no gubernamentales. El proyecto de ley es un recordatorio de la voluntad del gobierno de acabar con la disidencia. Desde que estallaron las protestas de maestros y trabajadores del sector público en 2022, varios dirigentes sindicales, periodistas y activistas de organizaciones no gubernamentales han sido detenidos arbitrariamente.

En marzo, Maduro puso en marcha una investigación sobre la corrupción en PDVSA y otras empresas estatales que ha conducido a más de 60 detenciones y a la dimisión del antiguo ministro de Petróleo Tareck El Aissami. Los observadores han señalado que, en lugar de tomar medidas enérgicas contra la corrupción, la investigación parece destinada a consolidar el dominio de Maduro dentro del PSUV.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Aunque en noviembre de 2022 el gobierno de Maduro y la oposición reanudaron en la Ciudad de México las conversaciones que llevaban estancadas desde octubre de 2021, las perspectivas de nuevas negociaciones son inciertas. En marzo, el gobierno de Maduro exigió la eliminación total de las sanciones impuestas por Estados Unidos antes de llegar a cualquier acuerdo con la oposición.

Está previsto que Venezuela celebre elecciones presidenciales en 2024, aunque los expertos no esperan que sean unos comicios libres y justos. La oposición celebrará primarias en octubre. Es posible que se produzca una persecución selectiva de activistas, líderes sindicales y políticos de la oposición en el contexto de las continuas protestas por parte de los trabajadores públicos y de la campaña previa a las elecciones.

METODOLOGÍA

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

El Índice CCC abarca diferentes aspectos del entorno anticorrupción de los países—desde la independencia del poder judicial y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, hasta la calidad de las leyes que rigen los grupos de presión y la financiación de las campañas. La puntuación global del Índice CCC se compone de tres categorías:

- Capacidad legal (I)
- Democracia e instituciones políticas (II); y
- Sociedad civil y medios de comunicación (III).

Estas categorías se dividen a su vez en las siguientes 14 variables:

CAPACIDAD LEGAL

Independencia y eficiencia judicial

Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción

Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno

Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación

Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco

Calidad de los instrumentos de delación premiada

Nivel de cooperación internacional en materia de orden público

DEMOCRACIA E INSTITUCIONES POLÍTICAS

Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas

Procesos legislativos y de gobierno

Calidad general de la democracia

SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Movilización de la sociedad civil contra la corrupción

Mejoras en la educación

Calidad de la prensa y del periodismo de investigación

Comunicaciones digitales y redes sociales

En conjunto, estas 14 variables proporcionan una visión completa y detallada del entorno anticorrupción de los países, es decir, su capacidad para detectar, castigar y disuadir la corrupción. Las 14 variables influyen de manera diferente a la capacidad de los países para combatir la corrupción, por lo cual las variables reciben diferentes ponderaciones en la puntuación para así reflejar esta realidad. Por ejemplo, consideramos que la independencia y la eficiencia judiciales son más decisivas que la libre circulación de información en las redes sociales. En consecuencia, la primera variable tiene una mayor ponderación en la puntuación del Índice CCC.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos introducidos en el modelo del índice proceden de dos fuentes: datos públicos generados o recopilados por instituciones de renombre, y una encuesta realizada por Control Risks y otros expertos en anticorrupción en la región.

LOS DATOS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA EL ÍNDICE SE HAN OBTENIDO DE

Basel Institute on Governance
Freedom House
Harvard Electoral Integrity Project
International IDEA
International Budget Partnership
Newzoo Global Mobile Market Report
Reporteros Sin Fronteras
UNESCO
Banco Mundial
Foro Económico Mundial
Proyecto de Justicia Mundial

El índice se basa en los últimos datos disponibles de estas instituciones. Algunos datos de la UNESCO y del Foro Económico Mundial no fueron actualizados el año pasado. En esos casos, utilizamos los mismos datos que en el Índice CCC de 2022. Por ello, los resultados de la encuesta tuvieron un mayor peso relativo a la hora de determinar los cambios en las puntuaciones de los países para 2023. En algunos casos, se han excluido datos específicos del conjunto de datos; por ejemplo, el índice sólo utiliza el factor de Gobierno Abierto en la base de datos del Proyecto de Justicia Mundial y sólo la variable de financiación de campañas en el repositorio del Harvard Electoral Integrity Project.

Además de los datos disponibles públicamente, realizamos una encuesta basada en hechos con expertos en anticorrupción locales. La encuesta tiene dos objetivos. En primer lugar, complementar los datos disponibles públicamente, que en sí mismos no cubren de forma exhaustiva todos los ámbitos que pretendíamos evaluar. Y en segundo lugar, reunir

información más específica y detallada no disponible en el dominio público. El resultado final es una metodología que es un híbrido de datos “duros” y datos de encuesta, lo que garantiza la flexibilidad y precisión necesarias para realizar el análisis.

Como lo hicimos en la edición de 2022, consultamos a tres expertos por país: un analista de Control Risks más dos analistas independientes – comparado a dos expertos en 2019. Con la ventaja de contar con un experto adicional, pudimos rastrear valores atípicos: cuando un experto discrepaba significativamente de los otros dos (por más de dos puntos), invitamos al experto a aclarar el razonamiento detrás de la respuesta proporcionada.

Con más datos de encuesta, también pudimos realizar mejores comparaciones regionales para detectar anomalías. Por ejemplo, analizamos la correlación entre los datos “duros” y los de la encuesta y llevamos los casos de mayor divergencia a un análisis detallado.

La encuesta se realizó entre mediados de marzo y mediados de abril y en ella participaron los siguientes expertos: Mauricio Alarcón Salvador (Fundación Ciudadanía y Desarrollo), Fabiano Angélico (Università della Svizzera Italiana (USI)), Ana Luiza Aranha (Global Compact Network Brazil), David Arellano-Gault (CIDE), Miguel Carter (DEMOS - Centro para la Democracia, la Creatividad y la Inclusión Social), Marielos Chang (consultora política y profesora universitaria), Hazel Feigenblatt (consultora internacional anticorrupción), Mercedes De Freitas (Transparencia Venezuela), María Paula Garat (Universidad Católica del Uruguay), María Jaraquemada Hederra (Chile Transparente), Elizabeth Heurtematte (LOVILL), Mariana Labastie Gómez (ICD - Instituto de Comunicación y Desarrollo (Uruguay)), Leonardo Limanski ((consultor independiente), Sandra Martínez (Transparencia por Colombia), Gustavo L. Morales Oliver (Maral O'Farrell Mairal), Carolina Muñoz Con (According2Law), Vivian Newman (Dejusticia), Alfredo Ortega Franco (Universidad Rafael Landívar), Bonnie J. Palifka (Tecnológico de Monterrey), Carlos Anibal Peris Castiglioni (Universidad Nacional de Asunción), Cristián Pliscoff (Pontificia Universidad Católica de Chile), Denisse Rodriguez-Olivari (School of Transnational Governance - European University Institute), Paola Romero (Certezza Group), Lindsay Sykes (PPO Abogados), Simeon Tegel (periodista y analista), Camila Ulloa Torres (Grupo FARO), Ana Carolina Ureña A. (Trident Trust Panamá) y Geovanny Vicente-Romero (Inter-American Institute on Justice and Sustainability (IIJS)). Dos expertos externos que trabajan en Bolivia y Venezuela pidieron que no se les identificara. Los analistas de Control Risks que participaron son Joe Beckford, Mário Braga, Sebastián Fernández de Soto, Theodore Kahn, Leandro Lima, Laura Lizarazo, Marina Pera, Karla Schiaffino y Valeria Vásquez.

Los expertos mencionados no están necesariamente de acuerdo con todas las conclusiones y opiniones expresadas en este informe.

LIMITACIONES METODOLÓGICAS

Todos los índices que miden el comportamiento humano son imperfectos, ya que nunca pueden captar todos los elementos de un fenómeno determinado.

El Índice CCC es necesariamente una representación parcial basada en el modelo comentado anteriormente, con 14 variables, a partir de datos públicos y privados limitados. El modelo del índice tiene algunas limitaciones, como la subjetividad, el traslape y la endogeneidad (una relación causal entre algunas de las variables). Los cuestionarios enviados a los expertos de cada país fueron lo más fidedignos posible, pero inevitablemente se mantuvo cierto grado de subjetividad. Para reducir la subjetividad, aplicamos un análisis riguroso para comprobar la coherencia de las respuestas y pedimos a los expertos que interpretaran y compararan los datos con las medias regionales. El traslape se relaciona con el hecho de que algunas variables incluyen los mismos elementos: por ejemplo, la puntuación de Freedom House también incluye medidas de independencia judicial. En lo que respecta a la endogeneidad, aunque reconocemos que puede llegar a estar presente en la metodología, no socava la consistencia de los resultados. Se analizaron las mismas variables, utilizando las mismas fuentes de datos, para todos los países, por lo que cualquier endogeneidad afectaría a todos los países en buena medida de la misma manera. Por último pero no menos importante, es imposible analizar todos los elementos que afectan a la capacidad de un país para luchar contra la corrupción. Seleccionamos 14 variables que abarcan una amplia gama de temas y que consideramos que son los elementos clave que conforman el ámbito de la lucha contra la corrupción. Pero es posible que algunos aspectos se hayan dejado de lado. En los casos en que consideramos que esto suponía una limitación, destacamos este factor en el perfil del país.

AGRADECIMIENTOS

El Índice CCC edición 2023 es el trabajo de más de cincuenta personas y les estamos profundamente agradecidos.

En AS/COA, Gerenta de Policy Emilie Sweigart ayudó a gestionar la ejecución del proyecto y en la redacción del reportaje. El Asistente de Investigación Jack Quinn contribuyó al proceso editorial. El Director Creativo Donald Partyka y la Asistente de Arte Anais Gonzalez diseñaron el reportaje y las visualizaciones de datos digitales. La Directora de Relaciones con Medios Claudia Torrens y Socia de Relaciones con Medios Daniela Cobos ayudaron a amplificar el impacto mediático del Índice.

En el área de Control Risks, Director de Análisis de Datos Edmar Torres y Consultor Nicolas Flores dirigieron el trabajo de análisis de datos, llenando la creciente base de información del Índice CCC y consultando los datos para informar el reporte. Gerenta Senior de Marketing Laure le Masson y Coordinadora de Marketing Juliana Borges colaboraron con el equipo de relaciones con medios de AS/COA para coordinar la cobertura mediática y la organización de eventos. Lina Quintero Guzmán dedicó una gran parte de su pasantía en la organización al análisis de datos, brindando información útil.

Categorías

	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	México	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela
Capacidad Legal	4.28	1.83	4.80	6.22	4.58	6.69	4.39	2.46	3.56	5.26	4.27	5.51	5.80	6.54	0.81
Democracia e Instituciones Políticas	5.86	3.72	4.16	7.84	4.58	7.19	4.76	2.62	3.62	5.62	4.61	5.21	4.50	7.98	1.28
Sociedad Civil y Medios de Comunicación	7.01	3.62	6.15	6.56	5.99	6.30	5.80	5.00	5.62	5.55	6.05	6.21	5.41	7.15	4.57

Variables

Capacidad Legal	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	México	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela
Independencia y eficiencia judicial	3.88	1.01	5.05	7.17	4.95	7.05	3.90	2.60	3.45	4.54	3.21	4.68	5.16	8.19	0.49
Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción	3.67	1.17	4.67	7.50	5.17	7.83	4.67	0.83	3.00	5.00	3.67	6.17	6.83	6.83	0.00
Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno	5.78	2.91	6.67	7.25	5.30	6.97	5.09	4.88	6.36	5.43	6.22	5.69	6.97	7.19	1.37
Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación	4.17	0.83	4.17	5.67	3.33	5.50	3.67	0.83	2.33	5.67	3.50	3.83	3.83	5.17	1.00
Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco	5.06	2.77	3.94	5.80	4.47	4.98	4.17	3.00	4.06	4.80	3.81	5.11	4.96	5.12	2.30
Calidad de los instrumentos de delación premiada	5.00	2.67	5.33	5.00	4.00	6.67	4.33	3.00	3.00	5.67	3.00	6.67	7.00	8.00	0.00
Nivel de cooperación internacional en materia de orden público	3.00	2.67	4.00	4.33	5.00	7.67	5.33	3.67	3.67	6.00	7.67	7.33	6.67	5.00	1.00

Democracia e Instituciones Políticas	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	México	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela
Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas	4.89	3.14	4.19	7.22	3.45	6.99	4.32	2.50	4.10	4.39	3.77	5.19	3.57	6.72	1.45
Procesos legislativos y de gobierno	4.67	1.73	1.07	7.20	3.87	5.60	3.20	0.53	0.53	4.80	4.00	3.47	3.60	8.27	0.80
Calidad general de la democracia	8.50	6.60	7.20	9.40	7.00	9.10	7.00	4.90	6.00	8.30	6.50	7.00	6.80	9.60	1.50

Sociedad Civil y Medios de Comunicación	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	México	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela
Mobilización de la sociedad civil contra la corrupción	4.67	1.67	5.67	6.67	6.33	4.67	5.67	4.67	4.67	3.67	5.67	5.00	3.67	6.00	3.00
Mejoras en la educación	8.07	5.03	5.68	7.34	5.89	6.63	5.29	4.24	5.47	6.43	5.38	6.08	5.67	6.68	5.65
Calidad de la prensa y del periodismo de investigación	8.01	3.81	6.86	6.57	6.23	7.37	6.58	6.04	6.54	5.65	6.37	6.85	6.32	8.25	5.17
Comunicaciones digitales y redes sociales	7.29	3.98	6.37	5.65	5.49	6.54	5.66	5.04	5.80	6.44	6.77	6.89	5.97	7.65	4.44